

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

39ª REUNIÓN

29º SESIÓN ORDINARIA

2 de diciembre de 2020

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

– En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de diciembre de 2020, siendo la hora 15 y 17:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 52 señores legisladores, entre los presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 29º sesión ordinaria y 29º sesión virtual del 142º período ordinario de sesiones.

Invito a la señora legisladora Alejandra Piasco a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Piasco procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.

– Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a las señoras y señores legisladores que en este tipo de sesiones virtuales el voto de los presidentes o voceros de cada bloque es equivalente al voto de todos los legisladores de su bancada.

Asimismo, se les recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.

Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los señores legisladores y las señoras legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra el señor legislador Majul.

Sr. Majul.- Buenas tardes, señor presidente.

Solicito la incorporación del legislador Juan Carlos Castro como coautor del proyecto 31859/20.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra la legisladora Marcone.

Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.

Es para pedir la incorporación al proyecto 31756/L/20 como coautores al bloque de la Unión Cívica Radical, al bloque de la Coalición Cívica ARI y al bloque MST.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.

Es para pedir que, atento se me ha informado que la vía recursiva de la legisladora De Ferrari ha sido girada al sistema administrativo de la Cámara, lo que no corresponde toda vez que se trata de una sanción legislativa una cuestión de privilegio y, por lo tanto, la vía recursiva debe tratarse conforme y en el mismo contexto de la cuestión de privilegio.

Por lo tanto, solicito que también sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, así lo podemos ver lo más rápido posible.

Gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Señor legislador: no ha lugar a su solicitud.

La cuestión de privilegio ha sido tratada por la Cámara, ya se ha expedido y no corresponde su planteo.

Tiene la palabra el legislador González.

Sr. González.- Quiero decirle, señor presidente, que yo también he recibido la nota firmada por el abogado de la legisladora suspendida y, en este sentido no hay absolutamente –esto hay que dejarlo en claro- ninguna notificación por parte del Poder Judicial para con esta Cámara.

Hay un pedido por parte de la legisladora y de su abogado, desde mi perspectiva, absolutamente caprichoso.

Creo que el Cuerpo ya se expidió sobre este tema, y si a esta Legislatura llega alguna orden judicial de reconsiderar la cuestión, corresponderá discutirla. Mientras tanto, para nosotros esto es asunto terminado. Y lo dice con claridad -el doctor Aurelio García Elorrio es un gran abogado, pero su fanatismo le impide leer con ecuanimidad y con objetividad- el expediente de la Justicia, es decir, el que la legisladora sancionada ha traído a esta Legislatura. Está todo claro, señor presidente; no hace falta leer absolutamente más nada que el contenido del expediente judicial.

Concretamente, creo que este tema está terminado para este Cuerpo, y los argumentos los proporciona, precisamente, la Cámara Contencioso Administrativa a la que la legisladora se refirió, y creo que hay que terminar con esta cuestión.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.

Vamos a continuar con el temario concertado en Labor Parlamentaria.

Tiene la palabra la legisladora De la Sota.

Sra. De la Sota.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Mariana Caserio como coautora del proyecto 31746/L/20.

Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.

Solicito la incorporación de todos los legisladores y legisladoras del bloque de la Unión Cívica Radical y de la legisladora Irazuzta, del bloque ARI-Coalición Cívica, como coautores del proyecto 31868/L/20.

Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.

-4-

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría, y serán leídas a continuación las notas de solicitud de prórroga remitidas por legisladores y legisladoras en uso de licencia.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Nota 31873/N/20

Córdoba, 28 de noviembre de 2020.

Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S. / D.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de solicitar tenga a bien prorrogar por seis meses la licencia que se me hubiera aprobado en el pasado mes de junio a partir del día 9 de diciembre del año en curso, tal cual lo prescripto por los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de ese órgano parlamentario.

La presente solicitud tiene sustento en el ofrecimiento del señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, contador don Juan Schiaretti, de continuar en el cargo de Ministro de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el cual he aceptado, y cuyo ejercicio no es compatible con las funciones de legislador provincial.

Sin otro particular, y a la espera de una rápida resolución favorable de vuestra parte, salúdole con mi mayor deferencia, augurando pase felices fiestas.

Dios guarde a usted.

Eduardo Luis Accastello

Legislador provincial

Nota 31874/N/20

Córdoba, 27 de noviembre de 2020.

Sr Vicegobernador

Cr. Manuel Calvo

S. / D.

De mi consideración:

En mi carácter de legislador Provincial en uso de licencia, me dirijo a usted a fin de que se me otorgue, conforme lo autoriza el artículo 16 del Reglamento Interno, prórroga por el máximo plazo legal previsto de la licencia que el Cuerpo Parlamentario me concediera oportunamente.

Motiva este pedido el ofrecimiento del señor Gobernador Juan Schiaretti de continuar ejerciendo el cargo que actualmente ocupo dentro de su gabinete.

Sin más, y agradeciendo desde ya la aprobación por parte de mis pares de esta solicitud, le saludo muy atentamente.

Ricardo Sosa

Ministro de Obras Públicas

Nota 31881/N/20

Córdoba, 30 de noviembre de 2020.

Sr. Presidente

de la Legislatura

de la Provincia de Córdoba

Cr. Manuel Calvo

S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted, en los términos de los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba, solicitándole por medio de la presente la prórroga de la licencia oportunamente otorgada,

justificando el pedido en razón de estar en pleno ejercicio del cargo de Presidenta de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, al que fui designada mediante Decreto 1636, de fecha 10 de diciembre de 2019, emanado del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy atentamente.

Nora Bedano

Presidenta de la Agencia Córdoba Cultura SE

Nota 31882/N/20

Córdoba, 30 de noviembre de 2020.

Sr. Presidente
Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted y, por su intermedio, a los legisladores que componen al Cuerpo legislativo de Córdoba, con el objeto de solicitarle que, en virtud de lo dispuesto por los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, se prorrogue por 6 meses más la licencia que se me concediera en su oportunidad, y por las mismas razones por las que lo hiciera: el ejercicio del cargo de Ministro de Seguridad.

Sin más, descontando el voto favorable de mis distinguidos pares, los legisladores y legisladoras del Cuerpo que usted preside, le saludo con respeto y consideración.

Alfonso Fernando Mosquera

Ministro de Seguridad

Nota 31883/N/20

Córdoba, 30 de noviembre de 2020.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted y, por su intermedio, a los legisladores que componen el Cuerpo legislativo de Córdoba, con el objeto de solicitarles que, en virtud de lo dispuesto por los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, se prorrogue por 6 meses más la licencia que se me concediera en su oportunidad, y

por las mismas razones que se lo hiciera: el ejercicio del cargo de Ministro de Desarrollo Social.

Sin otro particular, le saludo a usted y a todos los legisladores del honorable Cuerpo con mi más distinguida consideración.

Juan Carlos Massei
Ministro de Desarrollo Social

Nota 31884/N/20

Córdoba, 30 de noviembre de 2020.

Al Sr. Vicegobernador
Cr. Manuel Calvo
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en su carácter de presidente de la Legislatura y, por su digno intermedio, a mis pares legisladores y legisladoras, a fin de solicitar que me otorguen una prórroga, por el máximo tiempo legal, a la licencia que en su oportunidad se me acordara.

Actualmente, tengo el honor de ejercer el cargo de Ministra que me confiere el señor Gobernador, ejercicio cuya continuidad requiere de la prórroga aquí solicitada, tal como lo autoriza el artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura.

Sin otro particular, saludo a usted y a las señoras legisladoras y a los señores legisladores con el máximo de mis respetos y consideración.

Claudia Martínez
Ministra de la Mujer

Nota 31885/N/20

Córdoba, 30 de noviembre de 2020.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos de los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, a fin de solicitarle tenga a bien poner en consideración del Cuerpo legislativo, que usted preside, el presente pedido de prórroga, por el máximo plazo legal, de la licencia que oportunamente se me otorgara, y por las mismas razones invocadas en aquella oportunidad; esto es, continuar en el ejercicio del cargo de Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba.

Sin más, y descontando la aprobación de la solicitud formulada, saludo a usted y a mis pares, señoras legisladoras y señores legisladores, con respetuosa y distinguida consideración.

Laura Jure

Ministra de Promoción del Empleo
y de la Economía Familiar

Nota 31889/N/20

Córdoba, 27 de noviembre de 2020.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Vicegobernador Manuel Calvo
S. / D.

De mi mayor consideración:

En los términos de los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a usted y a mis pares legisladoras y legisladores del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, a fin de solicitarles que se me conceda, por el máximo plazo legal contemplado en nuestra norma interna, una prórroga a la licencia a la banca de legisladora provincial que en su oportunidad me fuera otorgada por el Pleno.

Es por eso que formulo esta solicitud, reiterando el motivo que esgrimiera en el pedido originario de licencia, y que la Unicameral me otorgara, que no es otro que la continuidad en el ejercicio del cargo de diputada nacional, representando a Córdoba, defendiendo los intereses de los cordobeses y cordobesas en el Congreso de la Nación.

Sin más, y esperando la aceptación de lo solicitado en el tratamiento por parte del Pleno, saludo a usted y a mis pares legisladoras y legisladores con mi mayor consideración.

Alejandra María Vigo

Legisladora provincial en uso de licencia

Nota 31896/N/20

Río Cuarto, 1 de diciembre de 2020.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia Córdoba
Cr. Manuel Fernando Calvo
S. / D.

De mi consideración:

En los términos de los artículos 15 y 16 del Reglamento Interno de la Legislatura de Córdoba, me dirijo a usted y, por su intermedio, a los integrantes del Poder Legislativo que usted preside, con el fin de hacerles conocer mi intención de que se prorrogue, por otros seis meses, la licencia en mi cargo de legisladora provincial. Como la licencia que oportunamente se me concediera anteriormente, los motivos de esta solicitud son estrictamente personales.

Sin otro particular, y solicitando la prórroga mencionada, hago propicia la oportunidad para saludar a usted y a mis pares legisladoras y legisladores con respeto y consideración.

Adriana Mónica Nazario

Legisladora provincial en uso de licencia

Nota 31897/N/20

Córdoba, 1 de diciembre de 2020.

Al Sr. Vicegobernador
Cr. Manuel Calvo
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en su carácter de presidente de la Legislatura y, por su digno intermedio, a mis pares legisladoras y legisladores, a fin de solicitar que me otorguen una prórroga, por el máximo tiempo legal, a la licencia que en su oportunidad se me acordara.

Actualmente, tengo el honor de ejercer el cargo de presidente de la Agencia Córdoba Turismo, que me confiara el señor Gobernador, ejercicio cuya continuidad requiere de la prórroga aquí solicitada, tal como lo autoriza el artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura.

Sin otro particular, saludo a usted y a las señoras legisladoras y a los señores legisladores con el máximo de mis respetos y consideración.

Esteban Avilés

Presidente Agencia Córdoba Turismo
Legislador provincial en uso de licencia

Nota 31900/N/20

Córdoba, 27 de noviembre de 2020.

Al Sr. Vicegobernador
Cr. Manuel Calvo
S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en su carácter de presidente de la Legislatura y, por su digno intermedio, a mis pares legisladoras y legisladores, a fin de solicitar una prórroga, por el máximo tiempo legal, a la licencia que en su oportunidad se me acordara.

Actualmente, tengo el honor de ejercer el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos que me confiara el señor Gobernador, ejercicio cuya continuidad requiere de la prórroga aquí solicitada, tal como lo autoriza el artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura.

Sin otro particular, saludo a usted y a las señoras legisladoras y los señores legisladores con el máximo de mis respetos y consideración.

Julián López

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Nota 31902/N/20

Córdoba, 30 de noviembre de 2020.

Sr. Vicegobernador

Cr. Manuel Calvo

S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted en su carácter de presidente de la Legislatura y, por su digno intermedio, a mis pares legisladoras y legisladores, a fin de solicitar se me otorgue una prórroga por el máximo tiempo legal a la licencia que en su oportunidad se me acordara.

Actualmente, tengo el honor de ejercer el cargo de Ministro de Gobierno que me confiara el señor Gobernador, ejercicio cuya continuidad requiere de la prórroga aquí solicitada, tal como lo autoriza el artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura.

Sin otro particular, saludo a usted y a las señoras legisladoras y señores legisladores con el máximo de mis respetos y consideración.

Facundo Torres Limia

Sr. Presidente (Calvo).- Como se adelantara y se acordara en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, para referirse al tema va a hacer uso de la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: nosotros no queremos prorrogarle la licencia a Sosa, deseamos que salga lo más pronto posible del lugar donde está. Si hoy votáramos que se quede seis meses más, seríamos responsables directos de la presencia de ese señor que tanto daño a la Provincia de Córdoba.

Hoy día hemos perdido 5 mil millones de pesos más cuando el dólar oficial ha pisado los 87 pesos, otro Fondo Covid.

También queremos que, al no estar en el Poder Ejecutivo, vuelva acá, porque si vuelve lograremos lo que hace tiempo estamos pidiendo que es verle la cara. Necesitamos verle la cara a Sosa porque es el que fue, en los últimos años, nos aconsejando el endeudamiento de la Provincia; él iba a la otra Legislatura y nos decía: “pero si esto es la panacea”, “esto es bárbaro”, “vamos a andar muy bien”. Y nosotros le decíamos: “no, no lo haga Sosa”. Nos decía “profetas del atraso”, como ahora González me dice “fanático” -dicho sea de paso, cuando termine paso a la cuestión de privilegio correspondiente.

Voy a esto, señor presidente: Sosa debe salir en forma urgente del lugar donde está porque fue engañándonos a lo largo de los años.

Primero, porque dijo había un contexto nacional macroeconómico que iba a permitir que Córdoba pudiera pagar estas deudas; después, cuando vinieron las tres devaluaciones de Macri vino aquí –cuando todavía venía- a decir que la inflación lo iba alcanzar al dólar. Nos engañó como a un chico, engañó a los que le dieron el voto. Después, cuando vio que la inflación no iba a alcanzar al dólar dejó de venir a estar Casa. Esta vez, cuando hemos aprobado en primera lectura el Presupuesto no se aproximó, ni que tuviera una orden de restricción para venir a esta Casa cuando se lo llama para hablar con él. Después dijo que todo este endeudamiento –alevoso, digo yo- que recibía Córdoba demostraba la fortaleza financiera de la provincia, nos dijo eso también; que aprendiéramos lo que era administrar bien un Gobierno. Bueno, ahí andan los acreedores diciéndonos prácticamente chantas.

Y ahora viene el señor Sosa como si no pasara nada, como si no hubiera hecho nada. ¿Me explico? Lo manda a Giordano a poner la cara y Giordano no tiene ninguna explicación para dar sobre el horror en el que han transformado esta provincia, y ahora el señor Sosa se presenta como si no hubiera pasado nada y dice denme seis meses más de licencia aquí porque yo estoy administrando la Provincia.

No le debimos dar la licencia la primera vez que la pidió porque ya había un antecedente de Sosa. ¿Usted se acuerda, señor Vicegobernador, cuando la Nación nos ofreció una central térmica en Pilar –que la hacía la Nación- y Córdoba se encaprichó que la iba a hacer la Provincia y la hicieron con Electroingeniería?, ¿se acuerda lo que le costaba a Córdoba esa central, si no nos salvaba el Gobierno anterior que se hizo cargo de la obra?

Por esas razones, por favor, recapaciten sobre lo que van a hacer, porque sigue dando vueltas por el mundo pidiendo créditos; no es que está quieto y apesadumbrado por lo que ha hecho. No, sigue dando vueltas haciendo gestiones para tomar créditos en Kuwait, en la Luna, en Marte.

Nosotros nos oponemos. Si ustedes quieren hacerse cargo de semejante locura, háganlo.

Nada más.

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a continuar con el temario acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria. Una vez agotado el temario concertado, legislador, usted podrá hacer las cuestiones de privilegio que considere necesarias.

En consideración la aprobación de las prórrogas de las licencias que fueran leídas por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.

-5-

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.

Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.

Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, respecto de los distintos puntos del Orden del Día, voy a hacer la siguiente moción: volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 30° sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 23, 56, 82, 104, 105, 109, 114, 117, 123 y 125 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 31° sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 33, 52, 69 al 81, 83, 85 al 91, 97, 98, 100, 101, 103, 112, 116, 118 y 119 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 32° sesión ordinaria, a los proyectos que obran en los puntos 1 al 22, 24 al 31, 34 al 51, 53, 54, 57 al 68, 92 al 96, 106, 107, 108, 110, 120, 122, 124 y 126 al 128 del Orden del Día.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador Fortuna.

En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 30° sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 23, 56, 82, 104, 105, 109, 114, 117, 123 y 125 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 31° sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 33, 52, 69 al 81, 83, 85 al 91, 97, 98, 100, 101, 103, 112, 116, 118 y 119 del Orden del Día; de volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 32° sesión ordinaria, a los proyectos que están en los puntos 1 al 22, 24 al 31, 34 al 51, 53, 54, 57 al 68, 92 al 96, 106, 107, 108, 110, 120, 122, 124 y 126 al 128 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-6-

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la cual se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31688/E/20, que se compatibiliza con el proyecto 31652/L/20, y que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 2 de diciembre de 2020.

Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente a los proyectos de ley 31688/E/20 y 31652/L/20, compatibilizados, por los que se crea el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por al afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.

Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.

Quiero contarles que en las últimas semanas hemos tenido la posibilidad de escuchar a especialistas, de debatir en comisiones, de recomendar modificaciones y de receptorlas.

La promoción de la economía del conocimiento es para nuestra Provincia de Córdoba un gran paso en pos de lograr, en los próximos diez años, una política de Estado que contribuya al desarrollo productivo y exportador a través de servicios.

Es que, como hemos escuchado en las reuniones, Córdoba presenta condiciones para generar empleo genuino y crecimiento, a través del desarrollo de servicios basados en el conocimiento, porque concentra una gran cantidad de empresas y de empleados.

Nos encaminamos, entonces, a un proceso tan necesario, como obligatorio, en los tiempos que vivimos, que es innovar y adaptarnos al futuro de la producción.

Este proyecto, en su artículo 1º, crea un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento en Córdoba actualizando la Ley 10.649, cuyos beneficiarios son los rubros del software, servicios informáticos y digitales, producción y posproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, nanotecnología, entre muchos otros, que estén radicados y desarrollen sus actividades en la Provincia de Córdoba.

Es un régimen promocional que tiene vigencia por el plazo de diez años, y es una gran oportunidad para esos rubros, pero, también, para los sectores que se beneficiarán de los servicios, desde los profesionales, culturales, hasta los del entretenimiento. Se trata de rubros con gran potencial que debemos acompañar así como el mundo lo hace, e indirectamente acompañando a miles de profesionales, personal altamente capacitado que es empleado por este tipo de industrias.

Un gran porcentaje de formalidad de asalariados y de profesionales, y la restricción de oferta de la fuerza laboral en los últimos años, nos indican una posibilidad muy marcada de crecimiento.

También el proyecto anticipa un Programa de Promoción de Empleo a la Economía del Conocimiento, con el objetivo de estimular la contratación de mujeres, personas con discapacidad, personas residentes en zonas desfavorables, personas trasplantadas, personas travestis, transexuales, transgénero, o profesionales, doctorados o pos doctorados, en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por el término de seis meses para cada empleado contratado por tiempo indeterminado. Las mini PyMEs tienen especial prioridad en la asignación de este cupo.

Personalmente, confío en un Estado que pueda ofrecer oportunidades y que, a través de incentivos, logre lo que no se puede mediante castigos.

Lejos de este tipo de concepciones, ofrecer beneficios es una política optimista para generar confianza y apostar a la producción de bienes y servicios. En ese sentido, diez años de estabilidad fiscal, de exención del ciento por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de ciento por ciento del Impuesto de Sellos y de ciento por ciento del Impuesto Inmobiliario, es un esfuerzo que el Estado puede y debe hacer para que el sector crezca más aún.

Pero, nuestra tarea no finaliza hoy. En paralelo, es vital resaltar la importancia de la educación en este tipo de políticas.

Creo que debemos comprender que toda política de Estado necesita de una arista educativa; a medida que pasen los años, será lo único que logre convertirlas en políticas sustentables y, como se habló también en las reuniones de comisión, la necesidad de mejorar la conectividad a Internet para competir con otras provincias y regiones del mundo. Como vemos, esta ley es sólo un primer paso, del cual no podemos desligarnos.

La creación del Consejo Consultivo –en el artículo 7º, que incorpora el artículo 10 de la Ley 10.649–, del cual participan representantes del sector privado, instituciones académicas y también miembros de este Cuerpo, será un pilar importante para el inicio y la continuación a futuro. A este constante incentivo también se le suma el control posterior del Estado.

En ese sentido, nuestro proyecto en particular determina las sanciones a las empresas que no cumplan con el acuerdo, para que el texto normativo aclare qué

sucede en aquellos casos: suspensión del goce de beneficios, baja del régimen, revocación de la inscripción, inhabilitación para inscribirse nuevamente, entre otras.

Finalmente, creo que debemos tener también la honestidad intelectual para admitir que, en este contexto, no es nada fácil incentivar que empresas de servicios basados en el conocimiento inviertan en nuestra Provincia y en el país. El valor de nuestra moneda en relación con el dólar –veamos a cuánto está hoy el dólar–, sumado a otras variables macroeconómicas que ya todos conocemos, crean un gran desincentivo para aquéllas cuando deciden arraigarse.

No será tan simple como parece ni será un camino tan rápido como en otros países u otros contextos. Hoy, nos guste o no, el exterior también les ofrece beneficios, entre ellos, gran estabilidad. Este es uno de los motivos por los cuales, desde la Coalición Cívica ARI, presentamos este proyecto que fue compatibilizado con el del Poder Ejecutivo. Esperamos que redunde en más y mejores inversiones y en el mantenimiento de puestos de trabajo de muchas empresas radicadas en Córdoba.

Celebro que estemos debatiendo en miras a aprobar proyectos como este, y espero que todos los bloques acompañen esta iniciativa.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora María Elisa Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en mi carácter de presidenta de la Comisión de Industria y Minería de esta Legislatura y, además, como miembro integrante del bloque de Juntos por el Cambio, vengo a referirme a los proyectos de ley 31688/E/20 y 31652/L/20, con el objeto de crear un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento para la Provincia de Córdoba.

En primer lugar, podemos afirmar que las actividades de la economía del conocimiento son aquellas que unen el uso intensivo de la tecnología y el capital humano altamente calificado, software, producciones audiovisuales, biotecnología, ingeniería, servicios profesionales, etcétera. Se caracterizan por aumentar la productividad de la economía, ya que generan cantidad y calidad de empleo, así como importantes ingresos de divisas, hechos que, sin lugar a duda, contribuyen al desarrollo de todo el país.

En Argentina, la economía del conocimiento se ubica como el tercer complejo exportador detrás del agro y de la industria automotriz. Su trascendencia ameritó que el Parlamento nacional sancionara leyes que procuraran, entre otras cosas, ampliar el número de empleos formales, incluir más actividades y fomentar las inversiones en innovación y capacitación.

La importancia del tema, y la convicción de que su inclusión en la agenda de esta Legislatura era inminente, motivó que el día 24 de septiembre del corriente año –a instancias del vicepresidente de la Comisión de Industria, legislador Blangino– contáramos con la presencia del señor Mario Barra, importante empresario de la industria del software de Córdoba, quien nos brindó un pormenorizado panorama respecto de su sector.

En dicha oportunidad, se refirió a indicadores tanto de empleo, facturación y recursos humanos de las empresas del software, como de volúmenes de exportación; en todos los casos con incrementos paulatinos año tras año y sus expectativas a futuro.

Así quedó demostrado, con números provenientes del Monitor Estadístico TIC, el verdadero potencial de nuestra provincia, que permitirá para el 2030 pasar de los actuales 28.265 puestos de trabajo a 64.927, y que llegarían, incluyendo a todos los sectores de la economía del conocimiento, a 100 mil empleos de calidad, altamente capacitados y remunerados en el término de 10 años.

Además, el potencial del sector representa un camino promisorio como parte de la recuperación económica que necesita nuestra provincia, luego del impacto económico negativo producto de la pandemia del Covid-19.

Se trató, sin lugar a duda, de una reunión muy positiva, que dejó como principal conclusión que era imprescindible contar con una normativa provincial que determinara políticas públicas para el desarrollo de la economía del conocimiento en nuestra provincia.

Efectivamente, y respondiendo a esta necesidad mencionada precedentemente, se concreta el ingreso en el seno de este Poder Legislativo de los proyectos de ley antes mencionados, iniciándose su tratamiento en las comisiones a las que fue girado, a partir del 17 de noviembre pasado. Este tratamiento se extendió hasta el día de ayer y se llevaron a cabo cinco reuniones conjuntas de las Comisiones de Economía, de Educación, de Legislación General y de Industria. En las mismas se llevó adelante un proceso similar al puesto en práctica en oportunidad de tratar el proyecto de ley de biocombustibles y bioenergía en el sentido de recibir inicialmente a representantes del sector público y, luego, a representantes del sector privado, para posteriormente ser analizado y debatido por los legisladores miembros de las comisiones.

Esta metodología positiva –en opinión de quien les habla- permitió una adecuada interacción entre los distintos actores vinculados a la sanción de la ley y el diálogo enriquecedor entre los distintos bloques de esta Legislatura.

Con relación a los representantes del Gobierno provincial que pasaron por las comisiones -los ministros de Industria, Promoción de Empleo y Economía Familiar y de Ciencia y Técnica-, aportaron información sustanciosa respecto a la injerencia que en el sector alcanzado por el proyecto tienen nuestras Universidades y sus estudiantes, centros de investigación y sus becarios e investigadores; también, respecto al lugar que ocupa nuestra provincia en el país en cuanto a empresas y desarrollos en economía del conocimiento, descripción de estas actividades en el interior de la provincia, evolución del empleo, cuestiones de género y capacitación y exportaciones generadas por esta industria.

Respecto de los actores del sector privado, se recibió la opinión, a lo largo de dos reuniones, de miembros de distintos clústers tecnológicos existentes en el territorio de nuestra provincia y Cámaras vinculadas a los sectores industriales. Todos coincidieron en que los proyectos de ley en tratamiento dan respuesta al requerimiento que vienen haciendo desde hace tiempo.

Por cierto, el resultado de lo realizado en las comisiones es satisfactorio. Se compatibilizaron los dos proyectos de ley -el proveniente del Gobierno y el de la legisladora Irazuzta-, se recabaron las opiniones necesarias, a las que me referí

precedentemente, y los legisladores pudieron efectuar sus sugerencias y aportes, que fueron receptados, evaluados y, en su mayoría, aceptados. Todo ello resultó en el despacho que hoy estamos tratando mayoritariamente apoyado.

Señor presidente: podemos decir que frente a una ley nacional, que implicó beneficios de importancia para las empresas de la economía del conocimiento, y que puedan resumirse en reducción del Impuesto a las Ganancias, un bono de crédito fiscal y algunos elementos que tienen que ver con la presentación de las exportaciones, a través de retenciones y percepciones, esta ley provincial -que estaríamos en condiciones de aprobar esta tarde- genera beneficios o incentivos provinciales de trascendencia, los que se nuclean en tres pilares. Por una parte, beneficios impositivos; por otra parte, programas que tienen que ver con la promoción del empleo y, finalmente, con el acompañamiento en la formación y la capacitación del personal; también se prevén dos herramientas: un Registro Provincial de Beneficiarios de Promoción de la Economía del Conocimiento y un Consejo Consultivo.

Tras dejar, finalmente, expresada la posición del bloque, queremos decir que aprobamos el proyecto de ley en general y votamos en forma negativa el artículo 6, porque consideramos que implica una delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo que contraría distintas disposiciones constitucionales.

En definitiva, consideramos conveniente avanzar con la aprobación del presente despacho en el que se han compatibilizado los dos proyectos de ley citados, dado que entendemos que el mismo da una adecuada y oportuna respuesta a las necesidades y demandas de un importantísimo sector de nuestra industria y que la presente ley representa un importante aporte para potenciar el desarrollo de nuestra Provincia. Como suele decirse, es por acá, éste es el camino y Córdoba tiene que ser protagonista, por eso acompañamos el presente despacho.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.

Queda consignada en particular la posición respecto del artículo 6.

Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.

Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.

Adelanto el voto positivo en general del bloque de la Unión Cívica Radical para este despacho que –como decía la legisladora Caffaratti- es fruto de dos proyectos, el iniciado por la Coalición Cívica ARI, por la legisladora Irazuzta, y el proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo y, en particular, para que quede consignado en la versión taquigráfica, respecto del artículo 6, referido a la autoridad de aplicación, votamos en contra, y voy a exponer sucintamente los motivos de este voto negativo a ese artículo.

Economía del conocimiento -voy a tratar de no aburrirlos- articula el desarrollo para la potenciación de las industrias y la promoción de nuevas a partir de la tecnología. En los tiempos que vivimos, los tiempos de pandemia, la tecnología ha demostrado acabadamente su poder para mantenernos conectados, sin ir más lejos, casi los dos tercios de la Cámara hoy está sesionando fruto y

gracias a la tecnología. En consecuencia, se hace necesario vislumbrar nuevos caminos para la gestión del conocimiento y eso es lo que hoy estamos haciendo en esta Legislatura.

El valor del conocimiento es el valor de las potencialidades humanas que, junto con la tecnología, logran recombinar e innovar un mundo que está cambiando cada vez de manera más acelerada.

Córdoba no puede quedar afuera, Córdoba no queda afuera, y no sólo que no queda afuera, sino que creo que Córdoba, en este punto -las cosas por su nombre-, está dando un paso importante, está quedando por encima de muchas otras provincias, incluso, por encima de la ley nacional que regula lo que tiene que ver con la economía del conocimiento.

Esta ley favorece la diversificación económica; esta ley favorece y fomenta creación de empleos.

A partir de este instrumento legal que hoy estamos acompañando, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, el Gobierno provincial diseñará las políticas públicas necesarias para contener a emprendedores y a empresas interesadas, abocadas a la investigación y el desarrollo.

Sin embargo, señor presidente, la tecnología no lo es todo, la base primordial de la economía del conocimiento es el capital humano, las capacidades del conocimiento humano, la gestión del talento, la educación y la investigación. Así como el software emerge como una industria poderosa, existen numerosas empresas que aplican software como insumo y que nosotros entendemos que esta ley debería haber contemplado.

Creemos que es importante, en algún momento, tener en cuenta, al menos para los planes y programas a futuro, la promoción de actividades de otros rubros que no se encuentran incluidas en el proyecto que hoy estamos acompañando.

En tal sentido, hicimos una propuesta en el seno de las comisiones por rubros como electromedicina, agroindustriales, domótica, iluminación y automatismo, rubros que, además, no son contemplados en la ley nacional y que en nuestra Provincia han dado muestras de liderazgo en producción desde hace tiempo. Sin ir más lejos, empresas de telemedicina están siendo protagonistas prácticamente desde el inicio del corriente año. Si bien estos rubros no son específicamente desarrolladores de software, sí contemplan al software dentro de sus productos y, además, conllevan una gran inversión en investigación y en desarrollo.

También sugerimos que los alcances de la Ley provincial 9331, de "Compre Córdoba", que establece que se otorguen a las empresas adheridas al programa distintos grados de preferencia en las licitaciones efectuadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a aquellos bienes o servicios de origen provincial, beneficie a todas las empresas que son contempladas en la presente ley.

Si bien no han sido incorporadas estas sugerencias, otras sí, uno no pierde las esperanzas de que lo que hoy no se incorporó se pueda incorporar en el futuro. La ley es nueva y, como toda ley, es perfectible y modificable en los meses por venir. Esperemos que en la implementación de políticas de innovación del Gobierno de Córdoba sí puedan estar contempladas a fin de que estén contemplados todos los emprendimientos y empresas productivas en relación a la

economía del conocimiento para contribuir así a potenciar el desarrollo económico sustentable a través del ecosistema emprendedor de Córdoba.

Nada más, señor presidente. Ratificamos el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador. Queda consignado el voto negativo en el artículo 6 de la votación en particular.

Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: nosotros vamos a abstenernos; podríamos votar en contra de esta ley, pero como está la pluma de la legisladora Cecilia Irazuzta, nos parece que no correspondería porque nos consta la responsabilidad con que trabaja ella y su bloque, cómo han venido a traer a esta Legislatura realmente propuestas muy buenas en todo lo que tenga que ver con transparencia, en todo lo que tenga que ver con los nuevos modelos económicos, etcétera.

Pero el motivo de la abstención es muy breve, son dos renglones. Creemos que los recursos fiscales de esta Provincia escasean, que hay que administrarlos muy bien y hay que mirar las necesidades del conjunto, siempre hay que mirar las necesidades del conjunto.

Si se aprueba esta ley, la Provincia dejará de percibir impuestos que legalmente le corresponden por un plazo muy largo, sobre una de las pocas industrias que casi no han sido afectadas por la pandemia. Consideramos que esta renuncia que hace la Provincia es muy importante, pues las empresas de economía del conocimiento acaban de ser favorecidas por el Gobierno nacional con exenciones tendientes a favorecerlas.

Nos parece, por lo tanto, redundante e innecesario que la Provincia aumente las exenciones sobre este sector, cuando existe una multitud de sectores que aún no han visto mejorada su situación: los trabajadores de la Salud y la Educación, quienes en un momento de inflación galopante reciben aumentos que prácticamente son una burla, habiendo escuchado los reclamos de diferentes sectores como la industria del turismo, la metalmecánica, los gastronómicos.

Pensamos que cuando el Estado provincial elige privarse de ingresos fiscales debe hacerlo siempre para favorecer a los que están pasando por la peor situación y no, como en este caso, a un sector cuyas actividades pueden practicarse a distancia, sin ningún tipo de problemas y que, además, perciben ingresos provenientes de la exportación. ¿Qué dirían los dueños de los restaurantes o bares que se fundieron, si se enterasen que el Estado provincial va a beneficiar con exenciones por diez años a quienes fabriquen el software?

También pensamos que el fomento de la economía del conocimiento debe generarse a través de los proyectos educativos en la juventud de la Provincia pues los mismos empresarios del software, que fueron convocados durante el tratamiento en comisión de esta ley, explicaron que hay más de 3.000 puestos vacantes que actualmente no pueden cubrirse porque no hay suficientes cordobeses capacitados. O sea, no tiene sentido hacer lo que estamos haciendo, más bien pongamos esos recursos para capacitar esos 3.000 puestos de trabajo.

Tenemos que crear algún sistema para que los empresarios puedan deducir impuestos a través de aportes o proyectos educativos, eso es lo ideal. Esta ley no pide ninguna contraprestación a cambio de semejante beneficio, únicamente aumenta la ganancia de las industrias del software.

No estamos de acuerdo con que en el artículo 6° del texto normativo se deleguen facultades al Ejecutivo, etcétera.

Creemos que la legisladora Irazuzta ha trabajado con mucha responsabilidad y entiendo que ella pueda creer, y los demás legisladores que voten la ley puedan creer que, por lo menos, ayudamos a un sector muy dinámico de la economía y que va a darnos muchas satisfacciones el día de mañana, pero también nos ha tocado poner la cara en la pandemia frente a mucha gente que la está pasando muy mal.

Por las razones expuestas pedimos que se nos tenga por abstenidos en el proyecto.

Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. En su momento se pondrá en consideración la autorización para abstenerse.

Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.

Sra. Díaz García.- Señor presidente: adelanto que desde el bloque de Frente de Izquierda vamos a rechazar esta ley que se inscribe verdaderamente en un festival de subsidios a las empresas de todo tipo, y no es ninguna novedad porque esta Legislatura, incluso durante la pandemia, y como aquí se ha dicho, habiendo recibido múltiples denuncias de sectores realmente perjudicados económicamente por esta situación, ha decidido avanzar en todo tipo de beneficios, de exenciones, de subsidios a todas las patronales, de todo tipo y color.

No es nuevo, evidentemente, existe una política deliberada de salvataje a las grandes empresas que ya se ha llevado adelante con esta ley que también se votó de beneficios a las empresas que se instalen en los parques industriales, que también tuvo lugar con la ley votada recientemente de promoción a la producción de biocombustibles, y en la ley un poquito más lejana, pero que también iba en ese sentido, de buenas prácticas agropecuarias, que no hizo más que beneficiar al sector agrario, que viene depredando el ambiente sistemáticamente en nuestra Provincia.

Con esta nueva ley, lo que se establece son todos tipos de beneficios, pero quiero destacar que se va a llevar adelante una exención impositiva durante 10 años, una década, en la Provincia de Córdoba, cosa no menor. Se establece una estabilidad fiscal, sustentada en la exención del 100 por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del 100 por ciento del Impuesto de Sellos, del 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario, y a esto hay que sumarle lo que ya está garantizado a nivel nacional, que es la eximición del Impuesto a las Ganancias.

Además, el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de establecer, dentro del Presupuesto provincial, que se aseguren cada una de estas garantías, es decir, ajustar a los trabajadores y a la mayoría del pueblo para seguir beneficiando a este sector.

Acá -escuché muy atentamente- se ha hablado de que esto, además, generaría una promoción del empleo. La verdad es que no entiendo cómo no se

les cae la cara de vergüenza cuando hemos recibido múltiples denuncias de los trabajadores del CONICET, de los investigadores que vienen denunciando no solamente los despidos, sino también el vaciamiento de la investigación en las universidades. ¿No deberíamos, primero, atender ese aspecto si vamos a hablar de promoción del empleo?

Acá, en realidad, de lo que se trata es de empleo tercerizado, de más precarización laboral, es decir, de planes flexibles de trabajo para seguir garantizándole a las empresas ganancias. De hecho, no solamente se establecen estos planes de empleo en este marco de flexibilidad, sino que también se van a utilizar recursos estatales para otorgar asignaciones para el pago de los salarios de los trabajadores durante 6 meses, ¡una barbaridad!

Y quiero decir muy claramente que en esta Provincia se habla de beneficiar al sector de las PyMEs, se habla de beneficiar a las microempresas, cuando, en realidad, todo el mundo sabe que se trata de subsidiarias, de tercerizadas, de grandes monopolios que en nuestro país son bien conocidos: el Grupo Techint, los Paolo Rocca, los Vicentín que, incluso, han recibido, durante toda esta pandemia, los recursos del Estado, a través de las ATP y han continuado despidiendo trabajadores. Y todo ¿para qué?, para fugar los capitales al exterior, y hoy estamos pagando las consecuencias de esa situación.

Lo destaco también porque se habla de modernización y de futuro, ¿de qué modernización y de futuro estamos hablando, cuando en esta Provincia ni siquiera podemos resolver el problema del Presupuesto 2021 porque la Provincia está endeudada en dólares a punto de caer en default? Tenemos precios, tarifas dolarizadas y trabajadores cobrando en el 80 por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos una situación déficit fiscal que se va a agravar con este tipo de planteos que solamente rescatan al capital.

Bueno, se le da la espalda por donde se mire a los reclamos de las grandes mayorías trabajadoras, se plantea esta ley en función de ir a un rescate capitalista, pero no se atienden las grandes problemáticas que en nuestra Provincia han surgido y se han acelerado al calor de esta pandemia.

Estamos ante una inflación galopante, estamos ante un escenario y un horizonte verdaderamente oscuro para los trabajadores y para las mayorías populares y, sin embargo, continúan empeñados en seguir beneficiando la ganancia de todos estos sectores.

Por supuesto, desde el Frente de Izquierda no nos vamos a prestar a este festival de beneficios, exenciones para las patronales de todo tipo y color. Vamos a insistir con el planteo que, desde hace tiempo, venimos defendiendo de que se establezca un verdadero impuesto a las grandes fortunas que sirva para responder a las necesidades de las mayorías trabajadoras, es decir, del salario, de las jubilaciones, de la vivienda popular, de la salud y de la educación.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.

Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.

A un mes de haber aprobado exenciones impositivas para las empresas de la llamada Economía del Conocimiento, hoy se vuelve a la carga con otro proyecto para beneficiarlas. De hecho, en la ley que estamos debatiendo hoy se deroga aquella que aprobaron hace algunas semanas. Cómo será la desesperación por quedar bien con estos empresarios que les hacen cometer estas impropiedades que son un poco vergonzosas.

Si hay algo que nos permitió esta pandemia es comprender, en un plano concreto, un debate histórico de la teoría política y económica, que es el rol que debe cumplir el Estado en materia económica y en relación a las necesidades sociales fundamentales: educación, salud, vivienda, se hizo evidente la necesidad absoluta de un Estado presente, activo y planificador.

Nosotros siempre hemos planteado -y, hoy, más que nunca, lo ratificamos- que todos los esfuerzos y todos los incentivos estatales deben estar destinados a garantizar los derechos y las necesidades fundamentales de los trabajadores, trabajadoras, de los sectores populares, que son la mayoría. Y eso es imposible en el esquema impositivo actual, donde se beneficia a las grandes empresas y se asfixia a los pequeños contribuyentes.

A esto ya me referí en el debate sobre el Presupuesto, pero vale la pena traerlo a colación ahora porque lo que estamos debatiendo, más que un régimen de promoción industrial se trata de un régimen de privilegios extraordinarios a ciertos sectores empresariales.

En efecto, el proyecto que hoy debatimos, lejos de tratar de apuntalar y contener a los sectores más afectados y castigados por la pandemia –miren que hemos recibido a varios en todos estos meses-, busca rodear de exenciones impositivas y privilegios realmente importantes a un selecto grupo de empresas que, encima, tal como surge de los propios fundamentos de este proyecto, se trata de un sector económico que ha tenido un importante crecimiento en los últimos años; de hecho, es uno de los pocos sectores -como ya también se dijo- que durante la pandemia se ha visto beneficiado por el considerable aumento en la demanda de sus servicios.

Además, este sector ya se encuentra ampliamente beneficiado por la legislación nacional, que le ha conseguido exenciones en el Impuesto a las Ganancias hasta en un 60 por ciento y una recuperación de hasta un 80 por ciento de los aportes patronales.

Por eso, resulta inexplicable que el Gobierno provincial quiera seguir ayudando a un sector que claramente no lo necesita y que, muy por el contrario, tiene una probada capacidad contributiva.

De hecho, una de las desventajas de este tipo de gasto tributario –dicho por especialistas en la materia, no por mí- es que, en muchos casos, se crean estímulos para que las personas o empresas hagan aquello que de todas maneras habrían hecho, por lo cual, el estímulo se transforma finalmente en una concesión innecesaria.

Mientras, por supuesto, mantenemos una lista interminable de sectores a los que bien les vendrían esos fondos para mejorar sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida. Tenemos personal de salud, docentes con salarios de miseria, jubilados a quienes se les aplicó un brutal ajuste en plena pandemia, una enorme masa de trabajadores desocupados, y acá se propone reasignar recursos

y privilegiar a un grupo de empresas garantizándoles estabilidad fiscal y eximiéndolas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto de Sellos por el plazo de diez años.

Además, como ya también se dijo, el propio Estado provincial va a asumir el pago de asignaciones estímulo -que el monto no queda tampoco definido ni se especifica en este proyecto- a nuevos trabajadores que se incorporen en el sector por el plazo de seis meses, y todo esto sin que quede claro, por lo menos en el texto de esta ley, de cuáles son las obligaciones que se les va a exigir a estas empresas para acceder a tan grandes beneficios. Y pongo énfasis en esto porque el nivel de precariedad a la que son expuestos los trabajadores y trabajadoras en este sector es realmente inadmisibile.

Mencioné -cuando debatimos el paquete de exenciones que hoy se va derogar por darle uno más grande- el argumento de que dándoles beneficios a los empresarios se está aportando a la mejora en la calidad de vida y condiciones de los trabajadores, bueno, ese argumento es mentira, más bien es lo contrario; beneficiando a este sector se está fomentando una flexibilización laboral que no tiene nada de nuevo, que reproduce, con nuevas tecnologías, las formas precarizadoras de trabajo más antiguas sin ningún tipo de derecho.

Las denominadas discriminaciones positivas o inversas -como son los regímenes de promoción, aún en el plano tributario- deben estar dirigidas a sectores desfavorecidos y con dificultades para insertarse en el circuito económico, pero no para quienes ya gozan de una ubicación privilegiada.

Esto no hace más que promocionar la desigualdad y la concentración de recursos y riquezas en pocas manos. Si de verdad se quiere fomentar el uso del conocimiento, los avances de la ciencia y las tecnologías para resolver de la mejor manera posible las necesidades sociales y mejorar la vida del conjunto de la población, entonces, las políticas a desarrollar son las inversas a las que estamos discutiendo, son fuertes impuestos a los que más tienen y fuerte inversión en el desarrollo estatal en ciencia y tecnología.

Para terminar, una mención aparte merece la cuestión de género colocada de manera bastante oportunista, en el artículo 4º, que establece una asignación estímulo, es decir, un 30 por ciento mayor para el caso de las contrataciones de mujeres, personas travestis, transexuales y transgéneros.

Evidentemente, nuestra lucha incansable los obliga a tomar medidas, pero debo decir que es muy bajo tomar estas legítimas reivindicaciones para intentar ocultar el carácter regresivo de este proyecto.

Por estas razones, no vamos a acompañar esta iniciativa.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.

Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.

Sr. Limia.- Muchas gracias, señor presidente.

Tal cual lo explicaba la legisladora Irazuzta cuando comenzaba su exposición, estamos tratando este proyecto de ley 31688, compatibilizado con el proyecto de ley 31652, que modifica la Ley 10.649 creando un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento para la Provincia de Córdoba.

Este proyecto de ley realmente ha tenido un tratamiento exhaustivo en la Legislatura; hemos tenido cinco reuniones de comisión, y quiero destacar el trabajo de las Comisiones de Legislación General, de Industria, de Educación y de Economía; también quiero destacar el trabajo de sus presidentas, Sara García, Elisa Caffaratti y Julieta Rinaldi, y de todos los legisladores que participaron.

También quiero manifestar que, a través de estas cinco reuniones que hemos realizado para poder compatibilizar estos dos proyectos de ley, nos visitó el Ministro de Ciencia y Tecnología de nuestra Provincia, el Ministro de Industria y la Ministra de Promoción del Empleo. Además, nos visitaron una serie de especialistas en el tema, lo que nos permitió, en conjunto con los legisladores, poder modificar algunas cuestiones importantes que venían del Presupuesto que había elevado por el Poder Ejecutivo y también del proyecto de la legisladora Irazusta.

Me parece importante tener en cuenta que la economía del conocimiento es la aplicación del conocimiento para innovar, para incrementar el valor agregado y para aumentar la productividad; es un nuevo patrón de desarrollo donde surgen nuevas industrias y donde las tradicionales –y creo que esto es importante- se ven potenciadas por la adopción y la aplicación de nuevas tecnologías que aumentan su competitividad y su productividad.

Como lo decía el Ministro De Chiara durante su participación en la primera reunión conjunta de comisiones, se trata de usar el conocimiento, el talento, las personas como el eje principal para la creación de nuevos productos y, a partir de estos nuevos productos, generar más valor a partir del conocimiento, que se los incluye y que se les agrega al cada uno de ellos.

La economía del conocimiento aborda cómo la educación y el conocimiento, es decir, el capital humano, pueden servir como un activo que se puede vender y exportar para generar actividad económica para las personas, para las empresas y para la economía. Este componente de la economía depende, en su mayor parte, de las capacidades intelectuales.

En la economía del conocimiento los productos y servicios se basan en la experiencia intelectual y se avanza en los campos técnicos y científicos, fomentando la innovación en la economía en su conjunto.

Muchos organismos internacionales -y creo que esto es importante remarcarlo- apuntan a cuatro pilares básicos en la economía del conocimiento, que creo que nuestra Provincia los tiene desarrollados y los puede desarrollar aún más, que es la estructura institucional que incentive al emprendimiento y el uso del conocimiento, la disponibilidad de mano de obra calificada y un buen sistema educativo, el acceso a la infraestructura de tecnología de la información y la comunicación, las comúnmente llamadas TIC y, por último, un panorama de innovación vibrante que incluye la Universidad, el sector privado y la sociedad civil.

Es un hecho innegable que las nuevas tecnologías, y particularmente la denominada industria 4.0, revolucionan constantemente la manera de producir bienes y servicios.

Algunos fenómenos, como lo han sido en los últimos tiempos la robotización, la inteligencia artificial, las impresiones en 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada, la nanotecnología y el software en general, entre tantísimos otros, son el resultado de la economía del conocimiento y son, sin duda,

actividades que están impactando transversalmente a todos los sectores productivos.

Estos fenómenos, como se ha dicho en este recinto, hoy en día son parte de vida cotidiana, y en esta pandemia se ha visibilizado de manera brutal el impacto que la tecnología aplicada tiene para todos los que constituimos esta comunidad.

Me gustaría mencionar algunos puntos importantes que tiene nuestra provincia que le dan una ventaja comparativa con respecto al proyecto de promoción de la economía del conocimiento. Córdoba cuenta con 12 universidades, cuatro altas casas de estudio que están específicamente relacionadas a la materia de la tecnología, 86 centros tecnológicos, más de 190 centros y grupos de investigación, 20 estaciones experimentales y más de 8100 investigadores, becarios y técnicos de diferentes instituciones.

Creemos que ese capital humano debe permanecer en nuestro país, y especialmente en nuestra Provincia, para poder potenciar y promocionar la economía del conocimiento.

También, es importante remarcar que nuestra provincia cuenta con cerca de 250 mil estudiantes universitarios, de los cuales el 12 por ciento pertenece a carreras que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática.

Como también lo dijeron, hoy en día, esta provincia cuenta 2 mil empresas que emplean entre 45 mil y 50 mil personas. Otro dato que surgió en las diferentes reuniones que tuvimos, y que creo que es importante, es la experiencia de más de 20 años que tiene nuestra provincia en la industria del desarrollo del software, siendo la primera que la reconoció como industria y que generó las condiciones necesarias para que esta actividad pudiera desarrollarse y crecer.

Como lo decían también algunos legisladores, las actividades de la economía del conocimiento son dinámicas; nos muestran el mayor ritmo para la creación del empleo y salarios más altos que el promedio general.

En la reunión tuvimos la posibilidad de charlar con el Clúster Tecnológico de Córdoba; sus delegaciones de Villa María, Río Cuarto y San Francisco, con el Vicerrector de asuntos académicos de la Universidad Siglo 21, y con presidentes de diferentes cámaras, como la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Aeronáutica, la Cámara de Industriales y la Cámara de Desarrolladores de Videojuegos, quienes de manera unánime coincidieron en la importancia de los beneficios que trae esta Ley de Economía del Conocimiento.

Señor presidente: esta ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, que ya fue bien informada por parte de los legisladores que me precedieron, tiene la importancia de generar la estabilidad fiscal para las empresas, lo que les permite tener un futuro de certidumbre en cuanto a la posibilidad de crecer, dentro del marco productivo de nuestra Provincia.

Como se dijo recién, estos beneficios fiscales se ven acompañados por dos beneficios más, que creo que son muy importantes. Uno tiene que ver con la asignación estímulo que se les da a los empleados nuevos que incorporen estas empresas. En este punto, me gustaría remarcar que cuando los empleados que se contraten acrediten la condición de discapacidad, ser mujeres, transgéneros, travestis, transexuales, residentes en zonas desfavorables o profesionales, van a

tener un incremento adicional esa asignación estímulo que se les va a otorgar. Me parece que es muy importante tener clara esta evidencia de perspectiva de género, inclusión y estímulo a ciertos sectores desprotegidos de nuestro tejido social.

En cuanto a la capacitación y la formación de recursos humanos prevista en el proyecto, se van a hacer en articulación con las universidades, centros tecnológicos, instituciones educativas y otras instituciones municipales, provinciales, nacionales e internacionales, tomando como referencia un programa que fue muy exitoso en nuestra Provincia, el programa CLIP, que es el Programa de Inserción Laboral y Capacitación para Nuevas Tecnologías que, a decir tanto de los legisladores como de aquellos expertos que participaron de las reuniones, son programas que estimulan y nos permiten potenciar al sector.

También quiero destacar la creación del Consejo Consultivo, que va a estar conformado por representantes del sector privado, instituciones académicas públicas y privadas y por miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de aquellas instituciones que también se estime conveniente convocar en función de la temática que se deba tratar.

Me parece importante remarcar el hecho de que, a partir de las reuniones de comisión, se incorporó la posibilidad de que los miembros del Poder Legislativo puedan conformar este Consejo Consultivo.

También, por un gran aporte de los legisladores de nuestra Casa, se incorporó un régimen sancionatorio, de carácter netamente enunciativo, para todos los beneficiarios que incumplan con las disposiciones de la ley o emitan información o documentación falsa a fin de obtener los beneficios que en la norma se establecen.

Por último, me gustaría destacar, nuevamente, el trabajo de todos los legisladores, de los cluster, las cámaras y las diversas entidades del sector privado vinculadas estrechamente a la economía del conocimiento, y los aportes que nos han hecho llegar y que hemos debatido de una manera importante y con mucho respeto, lo que nos ha permitido hacer un despacho de una Ley de Economía del Conocimiento que creo que va a permitir que el aparato productivo de la Provincia siga creciendo, generando mayor actividad económica y mayor capacidad de empleo, cuestión importante y neurálgica en la economía en nuestros días.

Por lo expuesto, señor presidente, emito el voto favorable del bloque de Hacemos por Córdoba, y pido el cierre del debate.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.

En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador Leonardo Limia.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

Corresponde ahora poner en consideración la moción de autorización para abstenerse solicitada por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

En consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31688/E/2020, compatibilizado con el proyecto 31652/L/2020, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Industria y Minería y de Legislación General.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-7-

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 31859, 31865, 31916 y 31921 compatibilizados; 31861, 31870, 31875, 31876; 31877 y 31925 compatibilizados; 31878 y 31895 compatibilizados; 31879, 31886 al 31888, 31894, 31907; 31908 y 31919 compatibilizados; 31909, 31910, 31913 al 31915, 31917, 31918, 31920, 31922, 31923, 31924 y 31926/L/20, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.

Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 31877 y 31925/L/20; la legisladora Díaz García consigna su abstención en los proyectos 31876, 31908, 31919 y 31922/L/20, y su voto negativo en los proyectos 31918, 31920 y 31923/L/20; la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo al proyecto 31879/L/20 y su abstención en el proyecto 31876/L/20.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-8-

Sr. Presidente (González).- Ahora daremos tratamiento en conjunto a los puntos 32, 55 y 113 del Orden del día. Proyectos 31022, 31221 y 31567/L/20, pedidos de informes acerca de la plataforma educativa Mi Aula Web, tareas impuestas a secretarios de escuelas, y conectividad en las escuelas provinciales.

Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marccone.

Sra. Marccone.- Señor presidente: nuevamente, queremos traer a este recinto el problema de la educación en tiempos de pandemia en la Provincia de Córdoba.

De estos proyectos de resolución que hoy presentamos, recibimos respuesta sólo a uno, el pedido 31567/L/20, en el cuál preguntábamos sobre la disponibilidad que tienen las escuelas de elementos para conectarse y de la disponibilidad de conexión.

Recibimos una respuesta, pero, a dos puntos principales: uno, ¿existe información sobre el uso, y evaluación de este uso, de la plataforma Mi Aula Web? y, dos, ¿realiza articulación el Ministerio de Educación con el de Ciencia y Técnica?, en ambos recibimos la curiosa respuesta de: "Habría que consultar con la Secretaria de Educación".

Señores: si nos dirigimos al Ministerio de Educación, pensamos que la Secretaria de Educación forma parte de él, y debe tener la deferencia de acercar las respuestas.

Nos interesa sumamente esta respuesta referida al uso de la plataforma Mi Aula Web, que es el requerimiento que hacemos en el pedido 31022/L/20. Allí no solamente preguntamos sobre cómo estaba conformada, sino también si se había tenido en cuenta la realidad que transitan los docentes y las familias de nuestra Provincia para poder acceder a los servicios web para conectarse.

Entre las preguntas que hacíamos está, por ejemplo, qué información había sobre la cantidad de padres, madres, tutores, que tenían activado el CiDi, condición indispensable para poder acceder a Mi Aula Web.

Preguntábamos, también, de qué manera se ha previsto para que los que no la tengan puedan hacerlo con simplicidad y celeridad; qué capacitaciones estaban previstas para docentes, padres y alumnos; cómo se había asegurado que los docentes tuvieran acceso a equipos y medios de conexión a Internet para poder aplicar este programa; qué medidas se han implementado para asegurar que todos los alumnos cordobeses tengan acceso a equipos y medios de conexión.

También nos interesaba saber algo que no es menor en el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado, sobre todo, de la manera tan particular que nos exige el aislamiento. Respecto a esto preguntábamos de qué manera se ha previsto facilitar que cada docente pueda adecuar en su vivienda un lugar físico donde desarrollar el trabajo con las condiciones necesarias de privacidad, iluminación, aireación y climatización; ¿se ha previsto la necesidad de contar con mobiliario adecuado?; ¿qué sugerencias o herramientas se les han facilitado a las familias para poder lograr estas mismas características para que sus hijos cuenten con las condiciones necesarias para este correcto proceso de enseñanza-aprendizaje?

Preguntábamos también -y lo volvíamos a preguntar en el otro pedido de informes- si se había hecho alguna evaluación sobre el uso que se había dado a esta plataforma.

Como no tuvimos respuesta, hicimos un breve recorrido por diferentes grupos de docentes pidiendo sus opiniones. Voy a leer un resumen que nos acercaron de una escuela pública, cuyos docentes también trabajan en escuelas privadas y cuyos hijos van a diferentes tipos de escuelas, públicas, privadas, especiales o generales, dice: “Esta plataforma llegó tarde; ya teníamos un sistema armado con otra plataforma, Google Classroom, y era mucho más amigable informáticamente que Mi Aula Web.

Mi Aula Web es de difícil acceso y uso por parte de los estudiantes; nuestra población es de características de alta vulnerabilidad y muchos no cuentan con un perfil de CiDi y se les dificulta mucho crear ese perfil.

Las familias que ya tenían un celular con sistema androide ya contaban con una cuenta gmail y accedían a la plataforma Google Classroom.

En muchos casos se trabajó con grupos de whatsapp en donde se hacía participar tanto a padres como estudiantes.

El mayor obstáculo para la educación en este tiempo de pandemia y aislamiento es la falta de acceso de las familias a Internet y la poca disponibilidad de dispositivos electrónicos para trabajar virtualmente. Tenemos casos donde conviven, en una misma casa, varios hermanos que tienen un solo celular para bajar y subir tareas.

El dinero que se invirtió para la creación de Mi Aula Web se podría haber usado para generar acceso a Internet en estas familias, o entregado a las escuelas para hacer fotocopias para los estudiantes que no tienen acceso a la red.

En una de estas escuelas llega al 30 por ciento el porcentaje de estudiantes sin ningún tipo de acceso a Internet. Imprimir un promedio de 10 trabajos para estos estudiantes, pensando que tienen un promedio de 11 materias cada uno, con 19 cursos, le demandaba a la escuela casi 80 mil pesos, y a este dinero no lo tienen las escuelas, pues el Estado no mandó ningún fondo para esto y, tampoco, la Asociación Cooperadora pueden recaudar en este contexto. Muchos docentes pusieron de su bolsillo para hacerles llegar trabajos a sus estudiantes.

Tampoco en las escuelas privadas se usa esta plataforma, se usa la plataforma Google Classroom, que es mucho más útil para poder controlar la entrega de los trabajos prácticos.”

En otros informes nos dicen que en algunas escuelas los directivos mandaban a través de Mi Aula Web los trabajos, pero los profesores no accedían para hacer las correcciones, por lo tanto, los alumnos dejaron de mandar a través de esa aplicación lo que producían.

En definitiva, llevamos varios meses preguntando para qué sirve, para qué se implementó y qué resultados dio. El Gobierno no nos da ninguna respuesta, la recogimos de quienes trabajan, de quienes siguen poniendo el hombro a esta tarea.

El tercer pedido de informes, que tampoco fue contestado por el Gobierno, tiene que ver con otro sector de quienes trabajan en la educación, que son los secretarios docentes de las escuelas. Tampoco recibimos respuesta a esto.

Sabemos que se les exige que tengan que trabajar en la emisión de certificados y analíticos, y no podemos saber si estos documentos públicos, confidenciales, van a ser trasladados a domicilios privados, qué mecanismos hay previstos para asegurar su resguardo, qué programas informáticos específicos se colocaron en los dispositivos privados de quienes deben seguir trabajando desde sus casas, o qué medidas se tomaron para que pudieran asistir a las escuelas.

Todo esto, cuando hablamos de la importancia de la economía del conocimiento, cuando hablamos de la importancia de la educación, nos hace pensar que hay dos estándares, un estándar para quienes generan ingresos y tienen la posibilidad de hacer valer sus reclamos, y otro estándar para quienes están poniendo el cuerpo, el esfuerzo, la capacidad, incluso su propio dinero, para lograr que los estudiantes de la Provincia de Córdoba accedan no a la economía del conocimiento, simplemente al conocimiento; al conocimiento que los ayudará a ser personas libres, al conocimiento que los ayudará a evitar todas las patologías sociales que los acechan cuando pasan el tiempo en la esquina porque no pueden ir a la escuela y porque dentro de su casa tampoco pueden acceder, de ninguna manera, a aquello que con “bombos y platillos” se anunció.

Por todo esto, volvemos a insistir y volvemos a pedir que la señora Secretaria docente que, según parece por la respuesta que nos dan, no forma parte activa del Ministerio de Educación, tenga a bien acercarse a esta Legislatura y dar respuestas a esto y a tantos otros planteos que venimos haciendo desde el mes de marzo.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.

Muy breve, sólo para apoyar estos pedidos de informes.

La verdad es que estamos terminando un año en el cual la educación se ha brindado exclusivamente bajo la modalidad virtual. Pasaron diez meses en los que no pudimos contar ni siquiera con un diagnóstico certero de la situación de conectividad y de equipamiento tecnológico, tanto de los estudiantes como de los docentes.

De hecho, yo también había presentado un pedido de informes que, incluso, está en el Orden del Día, sobre un supuesto relevamiento que estaba llevando a cabo el Ministerio sobre los recursos con los que contaban los docentes. Se me contestó de manera informal, nunca recibí la respuesta de que, aparentemente, dicho relevamiento nunca se terminó de realizar.

Que no contesten estos pedidos de informes o lo hagan de manera tan parcial, creo que ese todo un indicio de lo poco que se ha hecho con relación a este tema. Y si no contamos con un diagnóstico, mucho menos contamos con políticas de Estado concretas, durante todo este tiempo, para garantizar la conectividad y, por ende, el derecho a la educación en este contexto.

Incluso, después de muchos reclamos, presentaciones –desde nuestro bloque, por ejemplo, presentamos un proyecto integral de conectividad, tanto para estudiantes como para docentes–, sólo hubo por parte del Gobierno provincial el

anuncio de que se iban a repartir 50 mil notebooks, de las cuales, a diez días de terminar el ciclo lectivo, aún no se entregó ninguna.

Vuelvo a recordar, una vez más, que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes, y también es el responsable de garantizar el equipamiento de trabajo de todos sus docentes.

Además, no podemos creer que la virtualidad se va a terminar cuando llegue la vacuna. Evidentemente, se están operando cambios profundos en las prácticas educativas, y su buen desarrollo no puede quedar en el mero voluntarismo, tanto de la docencia como de los propios estudiantes.

Nada más. Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Cossar.

Sr. Cossar.- Señor presidente: muy breve; dos sesiones atrás, dije en este recinto que en menos de 48 horas nos habían convocado desde la Comisión de Educación para tratar un proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, de Economía del Conocimiento, que acabamos de aprobar. Parecía un buen proyecto.

Lo dije un miércoles; nos habían convocado el martes y nos estaban convocando el miércoles para el jueves, por segunda vez. Así como en 48 horas nos habían convocado para tratar este proyecto, reclamaba que había una serie de proyectos, que tienen que ver ni más ni menos que con la educación –entre ellos, un proyecto de ley para declarar a la educación en emergencia, a la educación como actividad esencial; un proyecto que tiene que ver con la falta de conectividad, más los proyectos que se están debatiendo hoy aquí, estos tres pedidos de informes del bloque de Encuentro Vecinal y otros tantos–, que no habían sido puestos en tratamiento ni siquiera por única vez en una reunión de la Comisión de Educación.

Dije que a la presidenta de la comisión no la dejaban, y Sara se enojó conmigo. Al día siguiente -jueves-, en la reunión de la Comisión de Educación, expresó que estaba enojada, que yo había hablado sin que ella estuviera. La verdad es que yo pensé que ella estaba en el recinto en ese momento, pero tampoco hablé mal; dije que la he escuchado, y ella se ha expresado públicamente a favor de que vuelva la educación presencial.

Dije –y hoy ratifico– que no la dejaban convocar para que la comisión tratara estos temas, y la respuesta fue, hace quince días: “Quédese tranquilo, legislador Cossar; esta semana o la que viene vamos a estar convocando a la comisión para tratar el proyecto de emergencia educativa”. Bueno, no cumplió; entonces, le digo a la presidenta de la Comisión de Educación –a través suyo, señor presidente– que no cumplió. A todo esto, hoy ya es 2 de diciembre. Esto fue la semana pasada, y no cumplió, salvo que mañana nos den una gratísima sorpresa y nos convoquen para tratar en la Comisión de Educación el proyecto de emergencia educativa. Pero no cumplió; faltaron a la verdad y me parece que vamos camino a tener un triste récord, que es que la Comisión de Educación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba no ha tratado ni un solo proyecto presentado por la oposición, ya sean proyectos de ley, proyectos de resolución,

pedidos de informes de toda índole que tienen un punto en común, y es que entendemos que la educación es una actividad esencial y prioritaria que este Gobierno ha desatendido en el corriente año.

Por eso, presidente, aprovecho y le pido que, dentro de sus posibilidades, transmita que veríamos con mucho agrado que cumpla y que en los próximos días –por más que tarde, ya está terminando el año- nos convoquen a debatir el proyecto de emergencia educativa y los pedidos de informes que han presentado los distintos legisladores referidos a educación.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.

Sra. García.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

No hace falta que me diga nada, señor presidente, ya lo escuché al legislador Cossar; quédese tranquilo, legislador, porque ya lo escuché claramente.

Sólo para que esté informado, quiero decirle que la semana pasada no pude asistir a la sesión ni tampoco estuve el jueves en la reunión de comisión, de manera que no es que yo le he mentado, no he podido por una cuestión de salud.

Si me permite, señor presidente, voy a hacer un par de consideraciones. Le quiero decir al legislador Cossar que el declarar a la educación como una actividad esencial no es facultad ni de la Comisión de Educación, ni de la Legislatura de Córdoba ni tan siquiera del Congreso de la Nación, porque esto ya está estipulado y tiene que ver con el derecho de los trabajadores, en este caso el derecho de los trabajadores de la educación y un acuerdo que se logró en la OIT hace mucho tiempo.

También quiero decir que la verdad es que hay pedidos de informes en los que las preguntas hasta son irrespetuosas, que tienen que ver con las condiciones de las personas o de cómo viven, cosa que excede al Ministerio de Educación a la hora de dar las respuestas. Por ejemplo, cuando se pregunta si el Ministerio dispuso de una silla ergonómica para los docentes en sus casas. Creer que la Argentina –no Córdoba- está en condiciones de disponer de una silla ergonómica para los compañeros trabajadores de la educación es creer que estamos viviendo en Finlandia, Dinamarca o Suecia.

Creo que cuando la Comisión se dirige al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Educación, y le traslada un pedido de informes y el Ministerio responde, lo menos que esperamos de los legisladores es que al cabo de 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 días contesten y digan que lo recibieron y que les gusta o no les gusta y que quieren precisar tal o cual cosa, pero no ocurre así.

Dicho esto, quiero manifestar lo siguiente, señor presidente: para los proyectos 31022 y 31221 solicito que vuelvan a comisión, y respecto del proyecto 31567, por contar con respuesta, pido su archivo.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por la legisladora Sara García de enviar al archivo el proyecto 31567/L/20 y de volver a comisión los proyectos 31022 y 31221/L/20.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legisladora Marccone?

Sra. Marccone.- Señor presidente: solicitaba poder responder a la legisladora preopinante.

No hay una falta de respeto en pensar que los trabajadores de la Educación tienen los mismos derechos que los trabajadores de la economía del conocimiento en las empresas privadas, a quienes se les acaba de conceder una exención y que, al inicio de la pandemia –pueden averiguarlo en diferentes empresas-, hicieron llegar a sus trabajadores sillas ergonómicas y equipos para conectarse, además de pagarles el sistema de conexión. No pretendo que la Provincia llegue a tanto, pero sí, lo que preguntaba es si se había tenido en cuenta algo que se aproximara a eso.

Lamento que quien es una representante gremial considere que los docentes tienen menos derechos -o tenemos, porque, aunque estoy jubilada me sigo considerando docente- que cualquier otro trabajador y no se puede considerar que debemos desarrollar nuestra tarea en las mejores condiciones posibles; el plantearlo es un camino para lograrlo, aunque sepamos que está lejos y que algunos funcionarios, incluso de los sindicatos, consideren que no nos merecemos y que es absurdo plantearlo.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

De cualquier manera, este tema ya ha sido votado y los proyectos 31022 y 31221 han sido devueltos a comisión y el 31567 ha sido archivado.

-9-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 84 del orden del Día, proyecto 31492/L/20, pedido de informes sobre el funcionamiento de la línea telefónica 102, de la SeNAF.

Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.

Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.

Tardíamente, llega este pedido de informes a este recinto, y digo tardíamente porque en las últimas semanas hemos sido testigos de hechos atroces en el marco de la SeNAF.

Quiero destacar que los trabajadores de la SeNAF, desde hace mucho tiempo, desde el mes de mayo vienen cuestionando las políticas que se desarrollan en el marco de la pandemia, que agravan una situación que tiene larga data, no es nueva en esta repartición estatal, pero que nos debe preocupar sumamente porque estamos hablando de niños, de adolescentes, de niñas que han sido largamente vulnerados en sus derechos y que, finalmente, terminan en

un contexto de judicialización o en las residencias estatales fruto de que no pueden ser revinculados con sus familias, es decir, que no asistir esta situación implica una nueva revictimización sobre estos niños, niñas y adolescentes.

Lo pongo sobre aviso porque los trabajadores de la SeNAF han sido quienes redactaron este pedido de informes y, tanto en mi carácter de legisladora como los legisladores que acompañan este pedido de informes, hemos sido vehículos de una denuncia que no es nueva, que no trae a la Legislatura...

Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.

La legisladora Eslava le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sra. Díaz García.- No, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra.

Sra. Díaz García.- Muchas gracias.

En este sentido, quiero destacar que hemos sido los vehículos de un reclamo que tiene larga data, que se viene haciendo en diferentes ocasiones y oportunidades ante las propias autoridades de la SeNAF.

Los trabajadores han denunciado que lo que tiene que ver con el servicio de call center, que recibe denuncias y notificaciones del Poder Judicial en cuanto a situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ha sufrido un vaciamiento muy claro, traslados compulsivos, despidos de activistas que renegaron de la situación que se vivía allí; trabajadores de call centers fueron trasladados a las residencias, de la misma manera, trabajadores del área penal juvenil, de técnicos zonales, de administrativos que, ante las licencias que en muchos casos requirieron trabajadores dentro de las residencias, tuvieron que ir a suplantar esas tareas porque la SeNAF se encuentra en una disminución absoluta del personal.

Bueno, no solamente han puesto en evidencia que está faltando la especificidad del cargo de estos trabajadores, sino que, en muchos casos han tenido que abandonar el seguimiento de los casos que allí se denuncian, al punto que lo que ha ocurrido es que de cada 10 notificaciones que reciben el call center 102 de la SeNAF sólo 3 han tenido un procedimiento de intervención a partir de la SeNAF. No sólo eso, sino que en lo que tiene que ver con las tareas de constatación y demás ni siquiera cuentan con un automóvil para poder dirigirse a esos lugares. Imagínense que en un marco de confinamiento, donde la ausencia de las clases, de instituciones públicas que puedan advertir de violación de los derechos, el hecho de que se haya vaciado este sector implica un agravamiento de esa situación de vulneración de los niños.

No sólo eso. Quiero destacar que, finalmente, los trabajadores, después de haber recurrido en múltiples ocasiones a las puertas del propio Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia, hicieron llegar una carta formal con un reclamo integral de lo que les correspondía al propio José Piñero, quien en su momento negó todas y cada una de las denuncias, planteando que la SeNAF funcionaba sobre rieles, que no había ningún problema de vaciamiento, ni

presupuestario, ni de falta de personal e, incluso, tachó de mentirosos a los trabajadores que venían denunciando esta situación.

Lo quiero destacar porque hoy nos encontramos con que este mismo funcionario, José Piñero, ha sido removido de su cargo y que, con un nivel de “panquequismo” sin precedentes, envió una carta a su superior planteando que, en realidad, la SeNAF enfrenta un vaciamiento sin precedentes al punto de que tienen un faltante de alimentos como frutas, verduras, carne, medicamentos, vestimentas y ropa interior para los menores, y que esta denuncia se había puesto sobre relieve en anteriores oportunidades.

Entonces, el encubrimiento es absoluto, es un encubrimiento de la violación, la vulneración y la revictimización que sufren estos niños en estas residencias y que atañe a una responsabilidad de conjunto del Gobierno provincial.

Lo destaco porque ahora estamos frente a la punta del iceberg: después de todas estas denuncias, resulta que se da a conocer el caso aberrante de una nena de 11 años que ingresa al Hospital Pediátrico con graves lesiones e indicios de un abuso sexual. Esta niña se encontraba albergada en la residencia Eva Perón, una residencia que debo destacar, y consecuentemente con lo que venían denunciando los trabajadores de la SeNAF, tuvo un brote de Covid que terminó en la licencia de una parte numerosa del personal y de ingreso de nuevo personal precario.

En vez de atender los planteos que hacían los trabajadores de que era necesario establecer el ingreso de personal permanente y capacitado, lejos de eso, se optó por ingresar nuevos trabajadores precarios, en su mayoría correspondientes al sector de acompañantes hospitalarios, que incluso se ha denunciado que muchos son militantes del oficialismo, sin ningún tipo de formación profesional ni de oficio, que ingresaron a estas residencias. Y en el caso particular de la residencia Eva Perón se denuncia que cambió totalmente los hábitos que se desarrollaban en esta institución. Se habla de que ni siquiera existían registros de la medicación que se les daba a las niñas, que había fuertes irregularidades en cuanto al personal y su vinculación con las menores.

Esto no es nuevo, porque ahora nosotros estamos tomando la punta del iceberg y tratando de desentramar cómo una niña, que se encontraba alojada en una residencia, termina siendo lesionada y abusada cuando los propios trabajadores habían denunciado 4 días antes, ante la doctora Elena Domínguez, que quien se había hecho cargo de la dirección de esta residencia, el señor Marcelo Bouchard, mantenía conductas sexuales inapropiadas contra las niñas, es decir, estamos hablando de un abuso sexual anunciado, en el que todos los funcionarios a cargo hacían la vista gorda o eran cómplices de un encubrimiento atroz.

Ahora, resulta que renuncia José Piñero y se quiere simplemente dejar limitada a esa renuncia la situación que se inscribe en una verdadera política generalizada en la SeNAF, que se enmarca en el vaciamiento generalizado, que se enmarca en la falta de nombramiento de personal profesional, que se enmarca en la falta de concursos, que se enmarca también en la falta de un presupuesto de los recursos que se requieren para atender esta situación y también en la precarización extrema que sufren los trabajadores.

Por supuesto, nosotros vamos a exigir que, de manera inmediata, se conteste acabadamente el pedido de informes redactado por los trabajadores, pero no nos quedamos ahí, también exigimos, junto a los trabajadores, que caigan las responsabilidades no solamente materiales, sino también políticas de esta situación.

De más está decir que un régimen que avala una niñez violada, humillada, empobrecida no puede tener ningún futuro.

Desde el Frente de Izquierda llamamos la atención respecto de este punto y nos organizamos en consecuencia hasta derribarlo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.- Señor presidente: como ya se dijo, este pedido de informes, apoyado por casi todos los bloques de la oposición, surge como iniciativa de los trabajadoras y trabajadores de la línea 102, que son los que vienen sosteniendo, con mucho esfuerzo y dificultades, este programa que es fundamental, pero como ellos denuncian, está siendo vaciado como el conjunto de las áreas de la SENAF.

Hace meses que las trabajadoras y trabajadores vienen denunciando innumerables irregularidades, la falta de personal, la escasez de móviles para las verificaciones, la precarización laboral, en definitiva, las violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La respuesta oficial que recibieron fue una carta firmada por el equipo de conducción de la Secretaría, donde se los maltrató y acusó públicamente de mentirosos.

Pero como dicen, la única verdad es la realidad, y 10 días después de esa carta violenta, Piñero tuvo que renunciar por un hecho realmente aberrante que pone en evidencia que los únicos mentirosos son los funcionarios y, por supuesto, que las denuncias de los trabajadores y trabajadoras son absolutamente verídicas y requieren atención urgente.

Sobre este hecho en particular no voy a extenderme porque realmente daría para un debate completo, pero sí voy a mencionar que la salida de Piñero no resuelve nada, porque las residencias siguen en el mismo estado de precariedad, y la principal responsable de la larga lista de decisiones absolutamente erradas que pusieron y ponen en peligro a todos los menores alojados en ella sigue siendo en dar las órdenes.

Volviendo el pedido en cuestión, nos parece elemental que lo respondan cuanto antes, porque estamos hablando de una demora muy importante en la atención de las denuncias de la línea 102, que se produce, justamente, por el nivel de superexplotación y precarización al cual está sometido el personal, y a la deficiente inversión presupuestaria en el área, a la que según se puede ver en el Presupuesto 2021, encima, piensan seguir ajustando.

Si en cualquier contexto contar con una línea de denuncia anónima que brinde escucha, contención y orientación a niñas, niños y adolescentes es fundamental, en circunstancias excepcionales, como las que estamos viviendo, es realmente clave, porque las chicas y chicos no van a la escuela ni a otros espacios

de socialización, no pueden contactarse presencialmente con sus docentes u otros funcionarios que podrían observar vulneraciones de derechos. Por lo tanto, hoy más que nunca, el servicio del 102 es una necesidad.

Por eso, solicitamos que concreten la respuesta a este pedido de informes, y reiteramos nuestro apoyo incondicional a quienes todos los días, en las peores condiciones, le ponen el cuerpo a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestra Provincia, que son los trabajadores y trabajadoras de la SeNAF a quienes acompañamos en toda su lucha.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.

Legisladora, por favor, conecte su micrófono, está sin audio.

Sra. Marcone.- Sí, ¿se me escucha?

Sr. Presidente (González).- Ahora sí, continúe.

Sra. Marcone.- Muy breve. Solamente para expresar que nosotros hemos acompañado este pedido de informes, pero, además, hemos presentado un proyecto de ley para que se revea la manera en que se nombran los empleados, sobre todo los empleados que tienen que trabajar directamente en relación con los niños en todas las dependencias que dependen de la SeNAF.

Este proyecto de ley no ha sido tratado, no ha sido tomado en consideración. Nosotros creemos que gran parte de lo que se señala en este pedido y en sus fundamentos tiene que ver con que, durante mucho tiempo, no se puso la debida atención en cuáles son las características que debemos pedir que tengan quienes van a tener a su cargo está difícil y delicada tarea.

Quiero señalar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que actualmente la SeNAF tiene el 80 por ciento de su personal calificado como administrativo; esto quiere decir que es muy poco el personal realmente capacitado para hacer frente a las denuncias que se reciben a través del 102 y a las situaciones que después pueden llegar a lo que tan tristemente ha tenido que comentarse acá.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Tiene la palabra la legisladora María Emilia Eslava.

Sra. Eslava.- Buenas tardes, señor presidente.

En primer lugar, creo que tendrían que haberse centrado en lo que hace referencia el pedido de informe. Para dejar tranquilas a las legisladoras, este pedido de informes ya ha sido elevado a la SeNAF; justamente, he estado hablando con la subsecretaria –porque hoy están a cargo los subsecretarios- y ellos van a efectuar el correspondiente informe, por eso pido la vuelta a comisión.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por la legisladora María Emilia Eslava.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-10-

Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 99 del Orden del Día, proyecto 30056, pedido de informes sobre directivas a la Policía Caminera para detección de infracciones y actas de constatación.

Tiene la palabra el legislador Cossar.

Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.

En marzo de este año, el fiscal de la Cámara del Crimen de la ciudad de Río Cuarto, doctor Daniel Miralles, quien impulsaba acción penal en contra de policías de la Caminera, en el marco del juicio por el homicidio de Griselda Soledad Correa, sostuvo en declaraciones periodísticas los testimonios vertidos por los acusados, quienes afirmaron bajo juramento -repito: quienes afirmaron bajo juramento- haber recibido instrucciones que los obligaban a labrar un mínimo de multas a realizar y a emplazar puntos de control, aun cuando éstos fueran ilegales.

Es decir, los policías, en el marco del juicio por homicidio, un juicio por un delito del cual después fueron absueltos, bajo juramento dijeron: “nos exigen hacer un mínimo de multas, aún en puntos de control ilegales”. En el juicio por la muerte de Griselda, estos tres policías acusados fueron absueltos; el accidente ocurrió en mayo del 2013 y recién llegó a juicio este año, la víctima perdió la vida luego de que un camión impactara contra su vehículo frenado por un puesto caminero, que la investigación determinó como negligente.

En el mismo juicio, presidente -ya va a ver por qué, porque lejos estoy de querer invadir la órbita judicial, todo lo contrario-, los integrantes de la Policía Caminera que declararon como testigos afirmaron que sus superiores les exigían hacer una determinada cantidad de multas por día o, de lo contrario, debían quedarse después de hora y, si mal no recuerdo, la cantidad de multas que les exigían eran cien por día.

Desde marzo, presidente, estamos 2 de diciembre, respetuosamente venimos solicitando en esta Legislatura -y al Ministerio de Seguridad- la respuesta a este pedido de informe -a usted le consta-, lo venimos pasando en Labor Parlamentaria para darle tiempo. Pero creo que les hemos dado un tiempo más que suficiente. En octubre, hacíamos referencia a este tema y hemos llegado a diciembre sin ninguna respuesta.

Y nos surgen preguntas, presidente, mire, estos policías que fueron absueltos del delito por el crimen de esta mujer, pero que dijeron que los obligaban a hacer multas ilegales, están en la calle, siguen labrando multas.

El Tribunal de Conducta Policial investigó este hecho, ¿a qué conclusiones arribó Ana María Becerra, presidente del Tribunal de Conducta?, quien lleva en el

cargo nueve años, cuatro en la anterior gestión del Gobernador Schiaretti, volvió cuando el Gobernador Schiaretti fue elegido y ahora lleva un año -cinco ahora más cuatro antes-, nueve años en el cargo lleva presidenta del Tribunal de Conducta Policial que representa al Poder Ejecutivo.

¿Nadie nos va a explicar, ninguna autoridad va a decir absolutamente nada? Tres policías dijeron bajo juramento que los obligaban a hacer un hecho ilegal, ¿hace falta que les diga hoy cómo está la institución policial considerada en la calle? Todos en la misma bolsa, los buenos y los malos policías, y van a seguir estando todos en la misma bolsa si nadie se ocupa de aclarar y poner blanco sobre negro y desmentir, decir que esto es no cierto, o reconocer si esto es cierto y decirnos que separaron a quienes dieron esas órdenes.

Mire, los cordobeses -los cordobeses, no piensen en los legisladores-, a los que representamos, merecen saber si esas instrucciones fueron impartidas desde el Ministerio de Seguridad por algún funcionario político, si fueron impartidas desde la propia Policía, si el Ministerio las tolera. Es la credibilidad de la institución la que está en juego.

Sin embargo, desde marzo nadie nos ha contestado ni siquiera un renglón. Entonces, presidente, no entendemos, créame que no entendemos ese silencio. No es bueno ese silencio. Una y otra vez solicitamos respuestas para estas preguntas, para información que necesitamos conocer, para información que necesitamos transmitir a los cordobeses. Desestiman sistemáticamente nuestros pedidos.

Entonces, en lo personal, me surge una pregunta: ¿será esto lo que le molestaba al legislador Fortuna en la sesión pasada? Lo escuchaba hablar y por un momento dije: “el hombre se está despidiendo de la presidencia del bloque”, seguro, porque la verdad es que no podía creer cuando el legislador nos retaba porque presentábamos pedidos de informes. En un momento dije: será una ironía, pero si es una ironía está mala porque, en este caso, que sepa que es una ironía les cuesta vida a los cordobeses. Porque hacer una ironía sobre la Policía, sobre las fuerzas de Seguridad, no hace falta que le diga que está costando vida.

Pero si no es una ironía, ¿es un intento de disciplinarnos?, ¿es un intento de adoctrinarnos? En verdad, le digo a través suyo, presidente, al presidente de Hacemos por Córdoba, que sepa que le va a ir mal. A lo mejor él podrá disciplinar a su bloque, adoctrinar a su bloque y, de esa manera, obstaculizar las respuestas que nosotros necesitamos conocer, pero a nosotros no, a la oposición no, porque nosotros vamos a seguir acá ejerciendo nuestro rol, que es el de exigir información, el de exigir que nos contesten, el de exigir que abandonen el silencio como principal política pública.

Porque estar del lado de la ciudadanía no es solamente gobernar, gestionar o hacer obras, es no esconderse, es dar la cara. El problema nunca ha sido de los que dicen, presidente, el problema es de los que se callan.

Nada más, por ahora.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra la legisladora Victoria Busso.

Sra. Busso.- Gracias, señor presidente.

Como todos saben, la Policía Caminera forma parte inescindible de la Policía de la Provincia de Córdoba. Por lo tanto, le comprenden las obligaciones y deberes propios de esa institución, teniendo una responsabilidad particular y específica, que es la seguridad vial.

En relación al pedido de informes en debate, vengo a manifestar lo informado por el Ministerio de Seguridad al respecto. En primer lugar, nos informa que jamás se impartieron instrucciones ni directivas respecto al número mínimo de actas de constatación de infracciones que debían labrarse.

Por otro lado, en relación a otro de los interrogantes planteados en el pedido de informes en debate, particularmente sobre los procedimientos e investigaciones internas que se han llevado a cabo a los fines de esclarecer la muerte de Soledad Correa, el Ministerio de Seguridad nos informa que, luego de conocer el testimonio de los policías en la causa, manifiesta que, siendo potestad del Tribunal de Conducta Policial, tiene que llevar adelante toda la investigación relativa a la legalidad del accionar policial. Ese tribunal tiene iniciada, en consecuencia, una investigación administrativa previa, que es el IAP, numerada como 1028700, de fecha 6 de marzo de 2020.

Por todo lo expuesto, señor presidente, y habiendo evacuado acabadamente todo lo requerido por el proyecto de resolución en tratamiento, solicito el cierre del debate y el archivo del mismo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate y envío a archivo del proyecto formulada por la legisladora Victoria Busso.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Legisladora Nadia Fernández: ¿qué solicita?

Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.

Disculpe por lo extemporáneo, pero solicito que en el proyecto 31707/L/20 se incorporen como coautores los legisladores Limia, Lorenzo, Alesandri, Ramallo, Pereyra, Suárez, Lencinas, Serrano, Piasco, Presas, Bañuelos, Caserio, Maldonado y Labat.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-11-

Sr. Presidente (González).- A continuación, daremos tratamiento al punto 102 del Orden del Día, proyecto 31164, pedido de informes sobre aspectos vinculados a la instalación de redes de fibra óptica.

Tiene la palabra la legisladora Verónica Garade Panetta.

Sra. Garade Panetta.- Señor presidente: resulta una paradoja que tengamos que reiterar este pedido de informes sobre la conectividad justamente hoy, cuando se aprueba en esta Legislatura la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Por eso, desde la Unión Cívica Radical, venimos a insistir en la necesidad de respuestas al pedido de informes efectuado sobre fibra óptica y conectividad, en el convencimiento y coincidiendo con el Gobernador que la conectividad y el acceso a las tecnologías es un derecho humano social.

Allá por agosto de 2018, esta Legislatura aprobó y sancionó la Ley 10564, que crea el Plan de Conectividad Córdoba, con el objeto de lograr un eficiente interconectado despliegue de infraestructura de conectividad en todo el territorio provincial para lograr la inclusión digital y la democratización del acceso a las tecnologías; estos eran los fundamentos.

Este plan preveía la instalación de 5 mil kilómetros de fibra óptica y dotar de internet, entre otros ámbitos, a 4300 establecimientos educativos estatales provinciales, todo ello dentro del plazo de tres años desde la sanción de la ley.

Hasta aquí en cuanto a las declaraciones, aspiraciones y deseos estamos de acuerdo, y así lo hemos escuchado al Gobernador, en reiterados discursos de apertura de sesiones de esta Legislatura, como el de este año, sostener que, “desde el año 2018, en el lapso de tres años se va a incorporar tecnología y vincular al 100 por ciento de los cordobeses, y que Internet es el nombre de la justicia social del siglo XXI”.

El problema radica en que este derecho humano social, como es la conectividad y el acceso a Internet, está muy lejos de ser una realidad en la Provincia de Córdoba, pese a los reiterados anuncios efectuados.

Asimismo, como sostienen los técnicos, la vida útil de la red de fibra óptica es de 20 años, y se degrada, deteriora y pierde capacidad de transmisión por su falta de uso, por lo cual, al dejar transcurrir tanto tiempo entre la instalación de la fibra óptica y su iluminación puede ocurrir la misma se encuentre rota en algunos sectores y haya que volver a invertir.

Así, a 10 meses de cumplirse los tres años que proponía el Gobierno con la Ley 10574, que eran los 5 mil kilómetros de fibra óptica anunciados, hoy se han instalado 2370 kilómetros de fibra óptica, y de los 427 municipios y comunas se ha llegado solamente a 71 localidades, de las cuales sólo 17 tienen menos de 10 mil habitantes.

Recién hace dos meses, en septiembre, se presentó el pliego de licitación para iluminar a una parte de esos 2371 kilómetros de fibra óptica. Es decir, de los 2.800 kilómetros de fibra óptica que faltan de instalar, y luego darle iluminación, nada se conoce.

Lo paradójico es que cuando se analizan las ciudades para las cuales se ha licitado iluminar, la mayoría son cabeceras de los departamentos. Nada –o casi nada- se menciona de las localidades que verdaderamente están aisladas, sin transporte interurbano y sin conectividad alguna. Nada se ha informado, tampoco, respecto a cómo será la prestación del servicio y si los municipios están en condiciones de efectuar el trazado interno de fibra óptica en sus territorios, porque el Gobernador anunció que la fibra óptica llega hasta la puerta de entrada de los

municipios y comunas y, luego, son los municipios, cooperativas y empresas privadas quienes efectuarán la prestación domiciliaria; por lo cual, no podemos garantizar que la conectividad llegue a todos los cordobeses.

Tanto la Ley 10.564 como el Poder Ejecutivo, en los fundamentos de esta obra, sostuvieron que la conectividad y el acceso a internet constituyen la base insoslayable para la reducción de desigualdades, y su reducción importa una cuestión prioritaria para la contribución a la inclusión y al desarrollo humano, y que la justicia social es educación, para lo cual es indispensable la conectividad.

Es por ello que no es una cuestión de declamaciones. No nos mintamos, no existe en Córdoba este denominado derecho humano social a la conectividad. Es probable que sólo llegue a quienes ya lo tienen por medios privados o porque viven en ciudades desarrolladas, pero el resto no; no lo tendrán los pueblos pequeños y olvidados de nuestra Provincia, sólo se está dando conectividad a quienes ya la tienen por otros medios, por lo cual, lo ejecutado evidencia que no ha existido el más mínimo criterio de necesidad o grado de aislamiento para la licitación efectuada, priorizando a quienes no acceden a internet.

El olvido de esta promesa del Gobierno se evidenció de modo patente cuando, en esta pandemia, existieron miles de niños y docentes que no pudieron acceder ni impartir educación por la ausencia de conectividad, por lo que quedó al descubierto que, pasados casi 3 años, nada se avanzó al respecto.

No basta efectuar promesas de neto corte electoralista, o levantar la voz para hablar de derechos sociales; es necesario que ellos estén al alcance de la gente, si no, no existen.

Por eso, vamos a insistir en conocer el grado de avance de esta promesa que, en 2018, se llamó “Plan de Conectividad Córdoba”, en saber cuántas escuelas públicas tuvieron acceso a internet a través de este plan, en saber cómo se va a ejecutar esta obra y quién va a prestar los servicios, cuál es el criterio de prioridad estratégico utilizado para la prestación del servicio; es decir, cuánto tiene de realidad el derecho humano social a la conectividad.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Legislador Carpintero: tiene la palabra.

Sr. Carpintero.- Gracias, señor presidente.

El proyecto que estamos tratando, el 31164, versa sobre uno de los temas más importantes que hacen a la equidad e igualdad de oportunidades y, por lo tanto, a la justicia social de todo el pueblo de Córdoba.

Como aquí se ha dicho hace algunos momentos, al tratarse la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, estamos en la era de la tecnología.

Para que todos y todas podamos entrar en esta era, y nadie se quede afuera, resulta fundamental reducir la brecha digital y garantizar el acceso a las nuevas tecnologías y a la conectividad.

En ese marco, la Provincia de Córdoba viene implementando el Plan de Conectividad Córdoba, aprobado por ley provincial; a mi humilde entender, se trata de una ambiciosa política pública que, con un horizonte de 3 años, pretende

incorporar tecnologías y vincular al ciento por ciento de los cordobeses, a través del ese plan.

El plan se lanzó en marzo de 2018 y, en su primera etapa, significó una inversión de más de 70 millones de dólares destinados al tendido de 2.391 kilómetros de fibra óptica en todo el territorio provincial, sumados al trazado de ARSAT y EPEC, con quien la Provincia trabaja en conjunto para integrar a la red. Esto implica que hoy la Provincia cuenta con más de 5.000 kilómetros de fibra ya tendida, que permiten llegar prácticamente a la totalidad de los establecimientos educativos de la Provincia.

Además, el plan contempló la dotación de WiFi libre a más de 200 espacios públicos de toda la Provincia, incluyendo espacios como este, donde nos encontramos trabajando ahora, señor presidente, que cuenta con la Red Conectividad Córdoba, que funciona de manera constante y con muy buena velocidad.

En paralelo, el plan contempló la articulación de diversas acciones de inclusión digital, que buscan fomentar capacidades e igualar las posibilidades reales de utilizar las nuevas tecnologías.

Esta primera etapa, señor presidente, fue culminada con éxito.

El 28 de setiembre de este año se dio un gran paso en la concreción de los objetivos de este programa: se llamó a licitación para la iluminación de la totalidad de la fibra tendida en la red provincial, más específicamente, se procura contratar la adquisición, instalación y configuración de todo el equipamiento e infraestructura necesarias para dejar operativa la totalidad de la red provincial.

En esta nueva etapa, se prevé la iluminación a 96 localidades, alcanzando a 2,6 millones de cordobeses y cordobesas, con una inversión de 646,5 millones de pesos. Se prevé un primer plazo de 10 meses para la ejecución de esta primera etapa, con algunos supuestos asociados a la evolución de la crisis sanitaria en el mundo y, obviamente, en Córdoba.

Se calcula una capacidad inicial de la red entre 20 y 40 gigabytes por segundo, pero con la particularidad de que será una red escalable, pudiendo llegar a 100 gigabytes por segundo con la primera incorporación de módulos ópticos.

El plan tiene tres etapas, señor presidente. En la segunda etapa pretende ampliar y convertir la red inicial a una red óptica tipo OT, alcanzando a 94 localidades adicionales, con una inversión de más de 11 millones de dólares.

En la siguiente etapa prevé sumar otras 42 localidades que, por encontrarse más alejadas de los troncales de la red, requieren de la incorporación de enlaces de 2 a 25 kilómetros, con una inversión cercana a los 3,5 millones de dólares.

En la última etapa se procura la construcción de una zona buffer mediante a la instalación de radio enlaces que tomen servicios de nodos de fibra óptica ya construidos. Esto demandará una inversión de 8,7 millones de dólares y permitirá alcanzar a las 195 localidades restantes, con un plazo de 36 meses en la ejecución.

Señor presidente: el Gobierno del contador Juan Schiaretto viene y continúa trabajando para garantizar el acceso a la conectividad de todo el pueblo de Córdoba. Primero, tendiendo la infraestructura y, a continuación, con la efectiva prestación del servicio de calidad que, obviamente, en estos tiempos resulta fundamental.

Por eso es que avanzamos, hoy, con una Ley de Economía del Conocimiento, porque ya hemos generado -y seguimos generando- las condiciones, y lo hacemos con un plan, señor presidente, que -si me permiten una calificación- me parece un ejemplo en términos de diseño de políticas públicas, siendo conscientes, obviamente, de que la implementación de esta nueva etapa se da en un momento muy particular de pandemia, con todas las complicaciones que cada uno de nosotros conoce.

Como es una prioridad esta política pública para el Gobierno de la Provincia, nos parece muy bien que discutamos estos temas, que pongamos en valor, que pongamos sobre la mesa, especialmente, todo el esfuerzo que cada uno de los cordobeses y todo el pueblo de Córdoba hace para permitir no sólo que la lucha contra la pandemia continúe y sea coordinada por el Gobierno de la Provincia, sino también para que se siga planificando y construyendo paralelamente el futuro.

Desde la Comisión de Servicios Públicos, que preside el legislador Dardo Iturria, nos hemos puesto en contacto con la Secretaría de Conectividad de la Provincia a los efectos de evaluar las dudas y responder a los requerimientos de los legisladores y legisladora autores de este pedido de informes y, actualmente, estamos ante la espera de más información, señor presidente.

Por eso, y para finalizar, voy a solicitar el cierre del debate y la vuelta a comisión del proyecto para que podamos continuar con su estudio.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Carpintero.

En consideración la moción de cierre del debate y vuelta a comisión del proyecto 31164/L/20.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

El proyecto vuelve a comisión.

Legisladora Mariana Caserio: ¿qué solicita?

Sra. Caserio.- Señor presidente, disculpe lo extemporáneo.

Es para pedir la incorporación del legislador Majul como coautor del proyecto de ley 37797/L/20.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-12-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 111 del Orden del Día, proyecto 31557/L/20, pedido de informes sobre eventuales medidas

disciplinarias contra el Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, por una denuncia en su contra.

Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.

Sr. Rossi.- Gracias, presidente.

Primero, va una disculpa. No acostumbro a leer cuando hago exposiciones en el recinto, pero, esta vez, en parte de mi exposición voy a hacer una excepción porque no quiero que crean que a las cosas que aquí se vean reflejadas ustedes crean que las digo yo, y al término de la exposición se van a dar cuenta de la gravedad de los hechos.

Mire, presidente, hay determinados temas que no tienen color político; cada uno de los que estamos aquí somos representantes del pueblo, nos ha votado la gente, y nos ha votado para hacer las cosas de la mejor manera posible; a veces salen bien, a veces salen mal.

Uno no adjudica intenciones de que salgan mal porque, evidentemente, cada una de las fuerzas políticas que está aquí integrada quiere lo mejor para la Provincia; pero, en determinadas cuestiones tenemos responsabilidades.

Lejos de efectuar una crítica a lo que está haciendo el Gobierno respecto a estas cuestiones con el aval que le están dando al titular del Servicio Penitenciario, quisiera referirme a determinadas denuncias que están circulando, que son absolutamente gravísimas y que, fundamentalmente, van en detrimento de las mujeres.

Cuando presentamos el proyecto 31557, que era un pedido de informes –a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- sobre las medidas disciplinarias dispuestas para con el señor Juan María Bouvier, Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, luego de que se conociera una denuncia en su contra por hostigamiento y violencia de género. Pero, desde que se presentó el proyecto hasta la fecha, ya tenemos no una sino varias denuncias en su contra.

Primero, el sitio En Redacción, en base a un testimonio que recibe de una persona que fue empleada del Servicio Penitenciario -no da el nombre de la persona para resguardar su integridad-, titula: “Denuncian al Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba por hostigamiento laboral y violencia de género”. Dice la persona que efectuó después la denuncia: “Siento que por el capricho de una persona se me truncó todo; fueron casi 10 años de padecer para poder darle comida, obra social y educación a mi hijo; un día dije no puedo más, no puedo denigrarme más”. Esta página explica que la persona llora mientras cuenta sobre la decisión de denunciar a Bouvier por hostigamiento laboral y violencia de género.

Esta denuncia está radicada -por si alguien quiere investigar más y ver cuáles son las cosas que se mencionan- en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, a cargo de la jueza Laila Córdoba.

Allí se habla también de muchísimas denuncias y cuestiones que tienen que ver con esta situación.

Después, el mismo sitio habla de otra denuncia que aparece por acoso sexual y hostigamiento a otra oficial del Servicio Penitenciario: “Me cortaron la carrera porque no quise acostarme con Heredia”, que era el número dos del Servicio Penitenciario, íntimo amigo del titular del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier.

Después, otra persona –a la que no voy a nombrar acá- presenta otra denuncia, frente al mismo juzgado, denunciando a José Gustavo Heredia, que era el Subjefe del Servicio Penitenciario, y también a Bouvier, de violencia de género, violencia laboral, abuso de poder, violencia psicológica, abuso sexual, discriminación laboral, hostigamiento laboral, denigración, faltas de respeto, daño moral y pérdida de chances, y explica que se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por sufrir depresión, ataques de pánico, ideas suicidas, y que eso le ha generado enormes problemas a la salud.

A esa denuncia se la hace al titular del Servicio Penitenciario y al Subjefe, José Gustavo Heredia, y comenta, en esa denuncia, que la obligaron a un pase a retiro a los 40 años. En un momento dice: “Durante las extensas y extenuantes jornadas de trabajo recibía, permanentemente, invitaciones a salir en pareja, en el ámbito privado, con tono evidentemente sexual, a lo que nunca accedí, todo lo cual generaba en mí un estado permanente de estrés, nerviosismo y ataques de llanto. Tan es así que, ante mi negativa a mantener un vínculo sexual con el señor Heredia, es que el mismo me comunica que le consiguiera los números de teléfonos de las jóvenes oficiales recientemente ingresadas del Instituto Penitenciario, o de funcionarias del Poder Judicial, ya que, en ocasiones, tenía contacto con personal policial. Cabe destacar que esta conducta del señor Heredia hacia las empleadas penitenciarias era conocida y, por tanto, consentida por el resto de la superioridad y del Servicio Penitenciario de Córdoba”.

Otra denuncia, de otra agente penitenciaria, que está radicada en el mismo juzgado de la doctora Laila Córdoba; también formalmente demanda en contra del señor Juan María Bouvier y, en uno de los párrafos, dice: “Soy oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba, que desde el año 2010 es que desde la superioridad de la institución penitenciaria, en cabeza del denunciado, por sí o por interpósita persona, comenzó un proceso de hostigamiento, en forma de violencia laboral, vulnerando mi derecho como empleada del Estado provincial, todo lo cual ha derivado en el inicio de tratamientos psicológico y psiquiátrico”. Habla de hostigamiento, de menosprecio laboral; de un traslado que, en virtud de negarse a ser denigrada permanentemente en su trato, se realizó a Villa María, bajas calificaciones, arrestos, traslados a San Francisco, otro traslado a Villa María. La dejaron indefensa en el Servicio Penitenciario, en la cárcel, para que sea salvajemente golpeada por una interna, todo lo cual está expresado en la denuncia, y dice: “Por ello, solicita que se ordene su reubicación laboral fuera del ámbito del Servicio Penitenciario y le reclama al señor Bouvier el resarcimiento del daño moral y psicológico sufrido por su persona y su grupo familiar”.

Hay otra denuncia, también puesta en el mismo juzgado, por otra persona, a la que no la voy a citar aquí. Es decir que ya no estamos hablando de una denuncia, estamos hablando de varias denuncias, estamos hablando del modus operandi del titular del Servicio Penitenciario que avala todas estas cosas.

Cualquiera de los que estamos aquí, que somos representantes del pueblo, puede ir al juzgado a entrevistarse con la jueza para que le brinde la información.

La denuncia que hace es por violencia de género, violencia laboral, violencia psicológica, discriminación, hostigamiento laboral, falta de respeto, daño moral, pérdida de chances, abuso de poder, abuso de poder; y dice: “ya que tengo una hija de 12 años de edad, la cual tiene parálisis cerebral con diagnóstico de

agenesia del cuerpo calloso, epilepsia, y trastorno del espectro autista, siendo la misma totalmente dependiente de ella en los cuidados, ya que toma medicación para epilepsia, se alimenta por biberón y usa pañales”. Cito esto porque, a pesar de eso, sufrió la denigración y denuncia a José Gabriel Gómez, a Bouvier, a Marta Inés Valenzuela.

Habla, en la denuncia, de hostigamiento permanente hacia su persona; dice, en un momento: “Cabe aclarar que en todo el tiempo que llevo de licencia médica, y a pesar de los certificados presentados, nunca nadie se comunicó conmigo desde la comisaría, no hubo ningún tipo de conexión por parte de mi trabajo, ni de los jefes, solamente el apoyo de mis compañeros y ex compañeros de trabajo, los cuales conocen mi situación con mi hija. Actualmente, me encuentro de licencia médica, lo cual me perjudica porque, al pasarme de los 180 días dispuestos de carpeta médica, en 15 años de servicio, entro en disponibilidad y voy a sufrir descuento en mis haberes”.

A pesar de todo eso, a pesar de las denuncias, a pesar de los planteos, el pedido de informes fue contestado y, cuando me lo remitieron, debo decir que me generó estupor la contestación que me hicieron llegar. Quiero leer algunos párrafos para que realmente sientan el mismo estupor que sentí yo. Dice: “El Servicio Penitenciario de Córdoba cuenta en su estructura con el Departamento de Bienestar Social, que tiene como ámbito de competencia, entre otras cuestiones, actuar frente a las diversas problemáticas con que se ven afectados los agentes de la institución. Conforme lo informara dicha área, los profesionales que la integran actúan específicamente a través de un procedimiento que identifica, aborda y asesora respecto de aquellas conductas de violencia hacia las mujeres y hombres pertenecientes a la institución, de las cuales se toma conocimiento por distintos medios, tales como la presentación espontánea de la víctima, derivaciones que realizan los superiores y a través de oficios remitidos por Tribunal de Conducta Militar. En tal sentido, se implementa un procedimiento que busca orientar y contener a mujeres y hombres que están atravesando por dicha situación, en sus más diversos alcances, con un abordaje integral. El personal que integra el área referenciada cuenta con entrenamiento en la temática, así como un perfil interdisciplinario, psicológico, legal y social”.

Después contesta: “Por otra parte, se efectúan revisiones periódicas con seguimientos específicos de los casos, con la finalidad de acompañar a la víctima y evitar posibles revictimizaciones”. Ninguna de las denunciantes cuenta que ha sido acompañada o que tuvieron solidaridad o empatía con la situación que está viviendo.

“Cabe mencionar que se trabaja en forma mancomunada con otras áreas gubernamentales provinciales específicas de la temática en violencia. Que, por otra, parte, se informa que los agentes de la institución han debido efectuar la denominada ‘Ley Micaela’, organizada y dictada por la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer”. Se ve que los mismos a los que se denuncia han hecho la capacitación en la Ley Micaela.

Miren, presidente, legisladores, cuando se produce este tipo de hechos –me hago cargo de lo que digo–, me da asco leer realmente el accionar del titular del Servicio Penitenciario. Todos nos tenemos que informar, todos tenemos que

averiguar cuál es la situación, todos nos tenemos que poner a estudiar si en serio estas cosas han pasado.

Cualquiera de los que estamos aquí recibimos permanentemente determinadas denuncias de distintas situaciones. Cuando presenté el pedido de informes, me llamaron varios abogados para decirme: “Mirá, si necesitás datos te los puedo dar; tengo eso que estás diciendo y mucho más sobre las cosas que están pasando”.

No podemos soportar que exista un funcionario que avale el proceder que se está llevando adelante en el Servicio Penitenciario. Lo pedí públicamente y lo pido aquí.

Para terminar, me parece que el Gobierno de la Provincia le tiene que pedir la renuncia al titular del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.

Sr. Giraldi.- Señor presidente: con relación al pedido de informes en debate, proyecto de resolución 31557/L/20, desde las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, hemos entregado el informe solicitado por el bloque de la Unión Cívica Radical el día 27 de noviembre del corriente año.

La secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, abogada Cecilia Lanzarotti, por expresas instrucciones del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julián María López, nos ha remitido el informe elaborado por el director de Asuntos Jurídicos del Servicio Penitenciario de Córdoba, adjutor principal, abogado Bruno Acciarri.

En dicho informe se brinda información detallada respondiendo a todo lo solicitado. En relación a la denuncia ante el señor Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, inspector general Juan María Bouvier, cabe afirmar que la misma se encuentra en instancia de investigación en la Justicia Ordinaria de Córdoba y confiamos, plenamente, en que la Justicia se expedirá sobre la referida denuncia.

También, brindamos todo nuestro apoyo para que este suceso se esclarezca de manera inmediata ya que, junto a nuestro bloque de Hacemos por Córdoba, repudiamos los actos de violencia en todas sus formas y en cualquier ámbito.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito el cierre del debate y el archivo del presente pedido de informes, en virtud de haber sido respondido.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

En consideración la moción de cierre del debate y envío a archivo del proyecto 31557/L/20.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a Archivo.

-13-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 115 del Orden del Día, proyecto 31574/L/20, por el que se cita al ministro de Seguridad a informar sobre la muerte de Joaquín Paredes, en la localidad de Paso Viejo.

Legislador Marcelo Cossar: tiene la palabra.

Sr. Cossar.- Gracias, presidente.

Quiero pedir disculpas, presidente. En este lugar, en esta Legislatura, acá, donde tenemos la posibilidad de parlamentar, de manera privilegiada si tenemos en cuenta a la cantidad de cordobeses que necesitan ser escuchados y no se los escucha; acá, cometemos errores y, a partir de esos errores que puedo haber cometido, quiero pedir disculpas por lo que no sé, por lo que me falta aprender, por haber confundido -hace dos sesiones- y haber tratado como sinónimos VIH y SIDA, fruto de la preocupación.

La gente de la Asociación Córdoba SIDA me contactó, agradeció al bloque que nos preocupemos por la situación que estaban pasando y me señaló el mismo error que me marcó el legislador Fortuna. Me disculpé públicamente, lo hice en las redes sociales y lo hago hoy acá, en el recinto. Y así lo voy a hacer cada vez que me equivoque. Le pido, presidente, que si usted advierte algún error me lo haga saber.

Pido disculpas porque, entre otras cosas, en la sesión pasada el legislador Fortuna dijo, textualmente: "Le recomendaría al legislador Cossar que no pida más informes y que pida disculpas". Lo voy a poder conformar en un 50 por ciento.

Las disculpas las acabo de pedir, pero a los pedidos de informes los vamos a seguir presentando por más que no los traten, por más que contesten como un robot, sin importar la temática.

Mandar al archivo pedidos de informes como el tratado recién, después de la altura con la cual defendió la preocupación el legislador Rossi, créanme, a uno le corre frío por la espalda. Y es el mismo frío que me corre cuando, en más de una oportunidad, gente que nos quiere bien, que nos aprecia, que me aprecia, dice: "che, no te metás con la Policía, no seas sonso, no te metás, ya está, no jodás ahí, ¿para qué?, no vale la pena", y así distintas frases, "es jodido ese tema", "si total no te contestan".

La verdad es que hoy pensé todo el día si iba a sostener llevar a debate este pedido de informes que tiene como objeto, una vez más, citar al ministro de Seguridad Mosquera, porque no tengo ganas de que me pase nada; pero no a mí, fundamentalmente, no quiero que le pase nada a mi familia, ni a mis hijos. Puedo contar que a uno de mis hijos lo pararon, en una hora, dos veces, a las 4 de la tarde, la Policía, la mala Policía -no la buena, que hay mucha, la mala Policía.

La verdad, presidente, es que entre esto de avanzar o hacer caso a los que me aconsejaban y desistir, entendimos en el bloque que había que avanzar, que hay que seguir insistiendo, que no tenemos nada que ocultar, al contrario,

tenemos que insistir hasta que algún día entiendan que cuando presentamos un pedido de informes no es en contra de nadie, es “a favor de”, es en cumplimiento de nuestra obligación.

Por eso, pedimos que el ministro de Seguridad venga al recinto y nos explique por qué en Córdoba, si no te mata un delincuente, te mata la Policía.

Queremos, porque corresponde, que asuman la responsabilidad política por el asesinato de Blas Correa, por el asesinato de Joaquín Paredes, por el asesinato de Juan Ávila, por mencionar los últimos tres acontecidos en un plazo aproximado de cuatro meses.

Queremos que venga el ministro de Seguridad Mosquera porque -es él, pero si no fuera Mosquera, si fuera Gómez, Pérez, el que fuere; lo digo por si alguno cree que es una cuestión personal, no tiene nada que ver con la persona- tiene que ver con el cargo, con la responsabilidad.

Queremos que nos diga por qué el cabo primero Lucas Gómez, el que asesinó a Blas Correa, estaba en la calle y portando un arma reglamentaria, si había sido imputado en 2017 por encubrimiento agravado en el marco de la investigación penal por el violador serial de La Calera; queremos que venga y nos explique por qué, si en esa oportunidad lo separaron de la fuerza a él, conjuntamente con tres policías más -cuatro-, tres de ellos siguen separados y este señor volvió a la fuerza y le volvieron a dar un arma.

Queremos que Ana María Becerra nos dé explicaciones. Y les pido, por favor, que no la vayan a ratificar en el nuevo Tribunal de Conducta, porque esa mujer mintió diciendo que la causa del cabo primero Lucas Gómez había sido archivada y por eso le habían permitido volver a la fuerza, y la causa está todavía tramitándose en Tribunales II.

Lo cierto es que ni ella, ni el ministro que no viene, ni nadie hasta el día de hoy, nos explica por qué lo dejaron volver, por qué le dieron un arma. ¿Sabe por qué?, porque esa arma es la que asesinó a Blas Correa, ¡no es joda!, no estamos pidiendo información de una obra, de una calle. Estamos diciendo que se hagan cargo; mataron a un pibe, mataron a tres en cuatro meses.

Nos tienen que explicar, tiene que venir el Ministro de Seguridad a explicarnos por qué Javier Alarcón, el otro policía imputado y detenido por el crimen de Blas Correa, también tiene antecedentes desde el año 2013 por denuncias de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Por eso insistimos; por eso, cuando nos dicen que no están haciendo abuso de la mayoría, y lo hago responsable al presidente de bloque, Fortuna; cuando se niegan a aprobar los pedidos de informes que tienen que ver con Seguridad, cuando se niegan a aprobar la solicitud de que venga el Ministro de Seguridad a dar explicaciones, están haciendo abuso de la mayoría. La mayoría no es para eso, la mayoría legítima que tienen, fruto de los votos que obtuvieron, no es para obstaculizar el acceso a la información, que se merece la oposición y todos los que representamos desde la oposición, y también los que votaron por ustedes.

Queremos saber por qué ya sabemos cinco muertos por inseguridad en el mes de noviembre; por qué hay golpes en dependencias privadas y públicas, y por qué a sólo semanas de distanciamiento social el delito ha crecido de manera desmesurada, porque nos habían dicho que cambiando la cúpula se acababan los problemas.

Y les pregunto -por Dios, contéstenos una, por favor- si Stampalija sigue cobrando su sueldo de asesor de Gobernador, dígnanos si le siguen pagando a este tipo que nos lo pusieron en todos los medios de comunicación diciendo que era la solución a los problemas de seguridad. Cuando se dieron cuenta de que era un papelón lo corrieron de la escena, pero por un momento, por 24 o 48 horas, nos querían hacer creer que de la mano del protocolo elaborado por Stampalija se iban a acabar los problemas de inseguridad en la Provincia de Córdoba.

El presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, la semana pasada, nos aconsejó -nos daba consejos, está bueno, nosotros los escuchamos-, nos decía: "no pidan más informes". Es nuestra obligación, legislador. Cuando usted no da trámite a los pedidos de informes, lo que está haciendo es obstruir el correcto funcionamiento de esta Cámara.

Necesitamos que el ministro venga a la Legislatura, no mañana -porque no sabemos, es toda una incógnita, porque dice "Ministerio", ojalá venga-, pero esperemos que venga no ha a pasar un PowerPoint, basta de PowerPoint, queremos que nos dé explicaciones. Queremos que nos digan si en este nuevo Tribunal de Conducta, que han anunciado con bombos y platillos hace un mes y que el proyecto ingresó hoy, van a ratificar a Ana María Becerra; queremos saber si van a ratificar a Manuel Cristian Savid, que están siendo investigados penalmente por la responsabilidad que les puede caber al haber permitido que policías que tendrían que haber estado separados regresen. Algunos dicen que fue por el llamado de un encumbrado político, pero como es una cosa que de la que no tengo pruebas, sería incapaz de ratificarlo, lo cierto es que ese hombre volvió y ese disparó y ese es el que lo mató.

Nosotros no ponemos palos en la rueda. Mal que les pese, la oposición representa a muchísimos cordobeses; con estos pedidos de interpelación, con estos pedidos de informes, no solamente representamos a los nos votaron, sino que también estamos representando a los que votaron a ustedes, porque hoy la preocupación por no ser la próxima víctima no tiene nada que ver con los partidos políticos, es una preocupación que atraviesa de punta a punta la Provincia de Córdoba.

Han ingresado un proyecto para modificar el Tribunal de Conducta; mientras tanto, hasta el día de hoy hicieron silencio.

Intentan disciplinarnos, y no está bueno eso, a eso déjenlo para el Gobierno nacional que quiere disciplinar y adoctrinar a los chicos, ahí están los diputados nacionales marcándoles que no hay que volver a esas prácticas. No nos quieran disciplinar, no nos quieran callar, no quieran hacer desaparecer la voz de la oposición en la Legislatura, porque no lo van a lograr, créanme que no lo van a lograr.

Nos quedan tres años y vamos a ejercer nuestro rol con la responsabilidad con la que lo venimos haciendo durante todo el año 2020. Nosotros, presidente, los legisladores, yo -créanme- me voy a callar el día que ustedes hablen y expliquen todo lo que tengan que explicar; ese día quédense tranquilos, ese día voy a estar callado.

Queremos que nos digan por qué recién en noviembre decidieron revisar la capacitación policial, cuando en julio desoyeron a los jueces a cargo de la sentencia por el trágico tiroteo de Nueva Córdoba; en esa sentencia se solicitaba,

con carácter urgente, que había que rever la capacitación de la Policía. El Ministro salió en todos los medios a responder que no había que revisar la capacitación de la Policía. Fíjense la ironía -por eso decía recién que las ironías matan-, 24 horas después, la mala Policía asesinaba a un pibe de 35 años en Villa Libertador.

Señor presidente: así como pedí disculpas, y nos vamos a disculpar las veces que sea necesario por los errores que pudimos haber cometido y por los que podamos cometer, es importante que desde el Gobierno también pidan disculpas por las muertes de nuestros adolescentes a manos del Estado y que, por lo menos una vez, se pongan del lado de la gente.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Muy breve, presidente.

En cualquier lugar del mundo que hubiera pasado esto que pasó con la Policía de la Provincia de Córdoba, y hubiera un Parlamento que puede trabajar bien, tendría que haber venido el Ministro del área a dar las explicaciones del caso, no son pequeñas cosas.

En el caso de la muerte de Blas, hay un compendio de una institución que está enferma; porque no es que le pegaron un tiro a un chico, ahí se puede hacer un curso de tres años de estudio de lo que no se debe hacer en una institución: disparar, que hubiera personas que no podían estar ahí porque tenían proceso judicial y debían estar en pasiva, plantar armas, cuando otros testigos iban a declarar para voltear algunas hipótesis no lo recibían; o sea, ¿qué más faltaba hacer?

Yo sé que cuando uno en una elección saca más del 50 por ciento de los votos eso te puede llevar a cometer el error de creer que no tenés que dar explicaciones de nada, pero no es así. El Gobernador nos prometió que no iba a abusar de esa mayoría, que íbamos a tener más democracia que nunca.

Acá lo que se está pidiendo no es en relación a un problema cosmético que tiene la Policía; si los policías llevan en los vehículos armas para plantar, eso te da la pauta de que es una cosa generalizada.

Está bien, tuvieron el 50 por ciento de los votos, pero creo que se equivocan; de hecho, se vienen equivocando, y cada vez que ustedes se equivocan a los cordobeses nos cuesta miles de millones de pesos.

Nada más, presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador García Elorrio.

Tiene la palabra la legisladora Díaz García.

Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.

Me parece que no hace falta abundar demasiado. En estos meses de pandemia contamos 7 casos de gatillo fácil, 7 pibes fusilados por la espalda como consecuencia de una política general, de un Estado policial que ha instalado el Gobierno de Schiaretti en nuestra Provincia.

Pero, quiero destacar que en el último período se ha dado un salto cualitativo en esta política, que no solamente alcanza al aparato represivo, a los funcionarios que están a cargo, sino que integra a cada una de las instituciones del Estado, entre ellas, la Justicia. Porque no solamente no se han resuelto, como corresponde, los casos de gatillo fácil, con los responsables materiales, políticos e ideológicos tras las rejas, sino que los que están tras las rejas son, principalmente, los trabajadores, los sectores populares que han salido a reclamar en contra de todos los atropellos que han vivido los trabajadores en el último período.

Quiero destacar que se da un salto cualitativo porque, consecuencia de esta política, en la Provincia de Córdoba, lejos de estar tras las rejas los policías que llevaron adelante estas atrocidades, están tras las rejas, por ejemplo, los trabajadores municipales del SUOEM; están tras las rejas o se ha avanzado en la detención, por ejemplo, de familias pobres, de mujeres -con sus hijos- que pelean por un techo dónde vivir. Y, en lugar de establecer una política que desvele las responsabilidades políticas de fondo que existen, que tienen que ver con las condiciones sociales y que se han acelerado en el último período, se avanza todavía más con la represión.

En Córdoba, tuvimos un escenario frente a los trabajadores municipales de Jesús María, que terminó con 41 detenidos; tuvimos un escenario similar con los trabajadores de la UTA.; recién me referí a los municipales, entre ellos, hay cuatro detenidos actualmente, por luchar por el salario; se ha detenido a familias trabajadoras por luchar por la vivienda, entre ellas, dos mujeres que fueron recientemente liberadas, entre 9 detenidos, que tuvo lugar después de este operativo descomunal que se aplicó sobre la ocupación de Estación Ferreyra, sin ninguna orden de desalojo que habilitara ese operativo y que, incluso, terminó con la detención del abogado defensor, Jorge Navarro, que asistió para darle un resguardo jurídico a las familias pobres y, en mi caso, cumpliendo mis funciones como legisladora provincial. Es decir que están dando un salto cualitativo de todo orden.

Por eso -como acá se ha dicho-, no alcanza con desplazar a la cúpula policial, tampoco va a alcanzar con este nuevo Tribunal de Conducta porque, en realidad, de lo que estamos hablando es de todo un Estado represivo que incluye a la Policía del gatillo fácil, que incluye a la Justicia adicta al poder y que, fundamentalmente, tiene una responsabilidad en el Gobierno de Schiaretti, en nuestra Provincia.

Entonces, por ahí, para algún sector alcance con que venga a dar explicaciones este sujeto que ha habilitado todos estos operativos represivos, que es hoy Ministro de Seguridad en nuestra Provincia, Mosquera. Pero, nosotros entendemos que las responsabilidades están mucho más arriba y, en ese sentido, planteamos que es necesario dismantelar de manera inmediata este sistema represivo; hay que denunciar políticamente el terrorismo de Estado con el que se está aplicando una mordaza a los reclamos de los trabajadores y a los reclamos populares y, fundamentalmente, llamar a la organización para no dejar pasar estas atrocidades.

Nada más, señor presidente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Legisladora Echevarría: tiene la palabra.

Sra. Echevarría.- Muy breve, señor presidente, porque ya nos hemos explayado sobre este tema en varias oportunidades.

De hecho, yo ya he expresado que el ministro Mosquera hace rato debería haber renunciado por todos los hechos gravísimos que han tenido lugar en nuestra Provincia en materia de seguridad.

Sin embargo, este Gobierno lo sigue sosteniendo, por lo que, a esta altura, el propio Gobernador Schiaretti debería poder explicarnos cómo es que su policía mata chicos inocentes en las calles, delinque, planta armas, hostiga y maltrata, todo con el total amparo del Gobierno, y se sigue sin que haya ningún tipo de cambio real, a pesar del reclamo social.

Digo esto porque justo hoy ingresaron leyes, por parte del Ejecutivo, que intentarán mostrar como la gran solución para cambiar a la Policía; recién en el 2020, y después de siete asesinatos, le avisaron a la Policía que no tenía que disparar salvo excepciones excepcionadísimas.

Por eso, evidentemente, no basta con protocolos o cursos de formación; ni si quiera basta con que vayan presos los responsables materiales, como los dos policías que fueron presos hoy por matar a José Ávila, o los siete policías detenidos por el asesinato de Blas, o los cinco detenidos por el asesinato de Joaquín, porque no se trata de un par de policías. Acá, el problema -como siempre decimos- es la institución a la que hay que dismantelar, por ser mafiosa, corrupta, socia del delito organizado, violenta y asesina de jóvenes.

Y acá se avanza en el camino contrario, incluso, metiendo más presupuesto en esta Policía, en detrimento de la salud y de la educación pública.

Hoy, la triste realidad es que los cordobeses y cordobesas les tenemos miedo a quienes deberían cuidarnos. Entonces, es hora de que debatamos en serio los cambios profundos que hay que llevar a cabo en política de seguridad para tener una fuerza completamente distinta, democrática, no violenta y con control social. Pero sepamos que mientras la función esencial del aparato policial sea cuidar a los que más tienen y reprimir a los de abajo no va a haber condiciones para cambiarlo.

Ese es el debate de fondo, que trasciende a la Policía para pasar al carácter y a los intereses que defiende el propio Gobierno.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Victoria Busso.

Sra. Busso.- Gracias, señor presidente.

Quiero expresar que este lamentable hecho, que culminó con la muerte del joven Joaquín Paredes en la localidad de Paso Viejo –y que también nos preocupa-, se encuentra en manos del Poder Judicial, que está llevando adelante todas las investigaciones pertinentes con la total colaboración del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Por otro lado, quiero resaltar el gran trabajo que se está llevando adelante para que hechos como éstos no vuelven a repetirse, no sólo desde el aspecto institucional y de las autoridades que manejan la fuerza policial, sino también en lo que hace a la formación, a los protocolos de actuación y al régimen disciplinario de dicha institución.

Es necesario manifestar que todo el peso de la ley debe recaer sobre quienes cometen actos como el que aquí se está debatiendo y que, en este sentido –reitero-, se está proporcionando a la Justicia todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de estos hechos.

Sin perjuicio de todo lo que acabo de mencionar, señor presidente, y en base a la interpelación que fue efectuada, pido el cierre del debate y la vuelta comisión del presente proyecto.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Busso.

En consideración la moción de cierre del debate y vuelta a comisión del proyecto 31574/L/20.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

El proyecto se envía a comisión.

-14-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 121 del Orden del Día, proyecto 31614/L/20, pedido informes sobre prevención de incendios para preservación del patrimonio de la Estancia Jesuítica de la Candelaria.

Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.

Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.

La verdad es que, después de las exposiciones de los legisladores Díaz García, Echevarría, Rossi y Cossar sobre temas tan lacerantes como los que ocurrieron en la SeNAF, en el servicio penitenciario o el homicidio de Paredes, este pedido de informes carecería de importancia o, diría, los anteriores son de una gravedad extrema.

El 29 de noviembre pasado se cumplieron veinte años de la declaratoria del conjunto de las estancias y la Manzana Jesuítica como Patrimonio de la Humanidad. De hecho, en este mismo momento, hay un acto en el Cabildo celebrando este aniversario, un orgullo para los cordobeses que, a comienzos de los 2.000, despertó con la iniciativa de tres vecinos de la ciudad de Alta Gracia, y culminó con el apoyo de múltiples actores, autoridades nacionales, provinciales -debo destacar al Gobernador De la Sota en ese momento-, y universitarias; fue un logro para Córdoba y para miles de visitantes que llegan a nuestra Provincia a conocer las estancias y la Manzana Jesuita.

En las vísperas de ese aniversario, lamentablemente, hemos presenciado cómo una de las piezas más particulares del conjunto, la Estancia Jesuítica de La Candelaria, es casi arrasada por uno de los múltiples incendios sucedidos este año en la Provincia de Córdoba.

El incendio arruinó parte del patrimonio y provocó su deterioro, por más que no se haya quemado la infraestructura en sí.

Quisiera mostrar las dos primeras fotos.

-Se proyectan imágenes.

Estas fotos nos muestran el día 2 de febrero de cada año, donde se reúne la comunidad; este hecho lo hace único, ya que es un patrimonio inmaterial, vivo y latente que se repite todos los años.

-Se proyecta una imagen.

Esta foto nos muestra el lamentable hecho que ocurrió en el mes de octubre.

-Se proyectan imágenes.

Estas imágenes nos muestran el daño; como verán, atrás, el monte está todo negro, por las cenizas.

Son todas fotos ilustrativas del daño alrededor de la estancia.

La declaratoria de la UNESCO entiende por patrimonio no sólo el hecho arquitectónico aislado, sino también el entorno ambiental y la atmósfera que lo rodea. Por lo tanto, es evidente que la destrucción provocada por el reciente incendio en La Candelaria ha degradado la calidad del conjunto.

Particularmente, esta estancia jesuítica, La Candelaria, es importante y se distingue de otros patrimonios culturales de la humanidad, declarados por la UNESCO, por su entorno, que es el mismo que no cambió en el tiempo desde su construcción, en 1.683, cuando fue construida por los jesuitas a orillas del río de los Guamanes. La estancia ya existía en 1.754, llegando a tener 135.000 hectáreas, propiedad de un solo dueño.

Con esto quiero manifestar la gravedad del hecho de haberse afectado el entorno de la estancia.

Fue luego del incendio que pedimos informes sobre una gran variedad de cuestiones, desde políticas de infraestructura preventiva de incendio, pasando por las causas de su origen, su evolución hasta que llegó a la Estancia de La Candelaria, la estrategia de extinción, la evaluación de los daños en sus distintos niveles ambientales, sociales, patrimoniales y de infraestructura.

La respuesta, en lo que atañe a la Agencia, fue correcta, pero incompleta, principalmente, en la evaluación de daños patrimoniales. Lamentablemente, nos topamos con la ignorancia preocupante de que la Agencia encargada de Cultura en nuestra Provincia desconoce el entorno ambiental y la atmósfera del lugar como parte del patrimonio de la UNESCO; y esto es de suma gravedad porque,

como ya sabemos, es común que cada año Córdoba sufra incendios de esta magnitud.

Estancias como La Candelaria, a diferencia de otras dentro de patrimonio jesuita, dependen exclusivamente de la órbita provincial, por lo que debemos revisar los recursos que estamos destinando para su mantenimiento.

Pasado el incendio, hoy, el paisaje de La Candelaria es triste, porque a su alrededor encontramos tierra arrasada, como lo muestran las fotos con que ilustré esto.

Por estos motivos, es necesario contar con una clara política de protección de estos hechos culturales y un eficiente monitoreo de los sucesos que los puedan afectarlos. Siendo el inalterado entorno ambiental, a lo largo de estos cientos de años, una de las principales características de esta estancia, es de suma importancia su preservación y conservación, bajo una mirada holística e interdisciplinaria.

Resulta fundamental tener un detallado informe del impacto social también.

Por todo lo expuesto anteriormente, y siendo responsables de preservar para las futuras generaciones un hecho cultural de la relevancia a nivel mundial que tiene la estancia, nos exige contundentes políticas de protección y conocimiento en la materia para lograrlo.

Dejo los interrogantes que faltaron, que serán remitidos a la Secretaría de Ambiente, como cuáles fueron las causas del origen del incendio que afectó a la Estancia Jesuítica de La Candelaria en el mes de octubre, cuál fue su evolución y cuáles fueron los daños ambientales.

A 20 años de una declaración como patrimonio de la humanidad, muchos especialistas critican que no exista un plan integral de gestión que sea transversal a todos los actores involucrados.

Los cordobeses debemos exigir, en ese sentido, responsabilidad, voluntad y compromiso de las autoridades estatales y no estatales para proteger a una manzana urbana y cinco estancias que son parte de la historia de nuestra provincia y del mundo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio: tiene la palabra.

Sr. García Elorrio.- Muy breve, presidente.

La Estancia de La Candelaria es la más importante del legado jesuítico, es la más grande de las estancias que abastecían a la Universidad Nacional, a la Real Universidad de San Carlos y al Convictorio que tenían los jesuitas.

La Estancia de La Candelaria, como es la más importante, es el sello de distinción de la Córdoba jesuítica; por eso, nosotros apoyamos esto. Sé que este pedido de informes tiene que generar en las dependencias respectivas del Gobierno provincial la responsabilidad y los recursos.

Es la menos visitada porque está en un enclave muy complicado, no es como las otras; esta está perdida en las Sierras Grandes, al sur de la Pampa de Olaen; es una situación de un enclave muy delicado; más razón para cuidarla, más razón para abrirla hacia el turismo y hacia los peregrinos que vienen de muchas partes del mundo.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.

Sra. García.- Gracias, señor presidente.

Como todos escuchábamos el informe solicitado, tal como lo recibimos en la comisión, fue remitido y hubo respuesta.

Infelizmente, a la legisladora le parecieron insuficiente o insatisfactoria dichas respuestas, lo cual nos hace pensar que, tal vez, hemos estado perdiendo el tiempo; debiera haberlo traído directamente a debate y así nos ahorrábamos tiempo nosotros, porque la comisión pidió un informe y la respuesta que viene es lo que responde el Poder Ejecutivo, así que, en función de ello, queremos pedir el cierre del debate y el pase a archivo del proyecto en cuestión.

Sr. Presidente (González).- En consideración el cierre del debate y pase a Archivo del proyecto 31614/L/20, según la moción formulada por la legisladora Sara García.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprobada.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a Archivo.

-15-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 31871/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 1 de diciembre de 2020.

Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba

Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 31871/L/20, dirigido al Ministerio de Finanzas, referido a la recaudación y pago del incentivo docente según los datos de la Cuenta de Ejecución del 30 de septiembre de 2020.

Sin otro particular, lo saludan atentamente.

María Rosa Marcone – Aurelio García Elorrio
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Legisladora Marcone: dispone de 5 minutos para formular una moción de reconsideración.

Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.

Es muy corto y muy simple lo que preguntamos en este pedido de informes.

Según informa el Gobierno de Córdoba, a través de su cuenta de Ejecución del 30 de septiembre, presentada hace pocos días, ha recibido del Gobierno nacional la suma de 1.894.800.791 pesos con el fin específico de pagar el incentivo docente; o sea que esa plata pertenece, legítimamente, a los docentes.

Hasta la fecha –lo controlé en el Portal de Transparencia hace unos días– sólo se registran como pagados 680.264.163 pesos, o sea que hay una diferencia de 1.214 millones y medio, entre lo que recibió la Provincia, en nombre de los docentes, y lo que trasladó a los docentes; pagó menos del 36 por ciento de la suma que Nación le depositó para eso.

Nosotros hicimos un pequeño cálculo. No queremos pensar mal, no queremos suponer que se están utilizando esos fondos para otros fines, ni tampoco queremos sospechar que están depositados en un plazo fijo. Como cuando nos dimos cuenta de esta discrepancia habían pasado 45 días, desde el 30 de septiembre, calculamos que en un plazo fijo a 45 días daría un interés de casi 51 millones de pesos. En otro tipo de inversiones, si se depositan por 45 días 1.200 millones de pesos, es posible lograr un interés mayor; algunos nos dicen que se puede llegar a cobrar hasta 85 millones en concepto de intereses.

La verdad es que nos preocupa porque lo que cobra un docente con 27 horas cátedras y 11 años de antigüedad, que cobró en el mes de noviembre recién la tercera cuota del segundo trimestre del año –o sea, en noviembre cobró la tercera cuota de lo que le hubiera correspondido cobrar en junio–, son 2.100 pesos; o sea, a cada docente se lo priva de una migaja, pero quien se queda con esas migajas acaba formando un succulento pan; un succulento pan que no sabemos para qué lo usa.

Es plata de los docentes, es plata que les corresponde a ellos. Podemos suponer que Nación se adelantó a girar fondos que corresponden a cuotas aún no devengadas, cosa que no parece cierta, porque si recién se les está pagando lo de junio, por lo menos ya han devengado un trimestre y medio más.

Podemos suponer, también, que el proceso administrativo es tan complejo que lleva más de 45 días completarlo.

Pero, cuando hablamos de fondos públicos es necesario saber, no podemos suponer porque, en medio de tantas suposiciones, uno se ve tentado de

sospechar conductas que pueden llegar hasta lo delictivo, y creemos que el pueblo de Córdoba, los docentes cordobeses y quienes manejan las finanzas de Córdoba, no pueden estar sospechados, deben dar claramente explicaciones y deben poner remedio de por qué 1.200 millones están detenidos, no sabemos dónde, y no van a sus legítimos dueños, que son los docentes cordobeses.

Por esto pedimos, y esperamos, que se trate donde corresponda y se nos den las respuestas suficientes para entender qué es lo que sucede.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Marccone.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-16-

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 31903/L/20, con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 1 de diciembre de 2020.

Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba

Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 31903/L/20, que se adjunta, pedido de informes al Ministerio de Educación sobre el Memorándum 011/20.

Sin otro particular, lo saludan atentamente.

María Rosa Marccone - Aurelio García Elorrio
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Legisladora Marcone: tiene la palabra.

Sra. Marcone.- Sí. Hago mi última intervención.

También acá nos llama la atención un caso que se podría convertir -o que a nuestro criterio realmente lo configura- en una discriminación hacia gran parte de los docentes cordobeses.

Este memorándum establece un régimen de excepción para elaborar una LOM. Una LOM es la Lista de Orden de Mérito por la cual quienes quieren ingresar al Sistema Educativo provincial tienen la posibilidad de ser tomados en cuenta en igualdad de condiciones con el resto de quienes se inscriben en ella.

No entendemos por qué, si no hay una emergencia educativa y existen los medios para elaborar una Lista de Orden de Mérito, tiene que establecerse un régimen de excepción y no elaborar la lista correspondiente a este año, que todavía no fue elaborada.

En este memorándum se fija que quienes pueden anotarse en esa lista de orden de mérito son aquellos que posean un título de profesor para la educación secundaria y especial, o título de formación pedagógica para graduados docentes, que hayan egresado entre el 1° de abril de 2019 y el 15 de noviembre de 2020, con lo cual, una persona que egresó en marzo de 2019 no puede anotarse. No entendemos -por eso preguntamos- con qué criterio se fijan estos límites, suponemos que debe haber alguno, y de peso.

También, se establece que estos títulos deben haber sido emitidos en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba. Hasta ahora, según entendíamos, cualquier título era habilitante para ejercer la profesión que fuera -también la profesión de profesor- en cualquier lugar de la República Argentina. No entendemos por qué la Provincia de Córdoba pone esta limitación.

También nos llama la atención que este memo tiene fecha del 13 de noviembre y fue difundido en los colegios -según lo que nos comentan los docentes- recién en lunes 17, y la convocatoria se iniciaba el 20. La verdad es que son muy pocos días.

La verificación del puntaje, una vez que se acceda, que se puedan cargar los datos y la junta los haya receptado, está fijada entre los días 1° y 3 de marzo. No se dice si se hará a través de la web o se presume que se podrá hacer asistiendo a las oficinas.

No sabemos si se ha tenido en cuenta, para todos los plazos tan acotados que se ponen, las dificultades recurrentes para acceder a la Web del Ministerio y, en particular, a los links de la Junta de Clasificación. Nosotros sabemos, tenemos la experiencia propia y de los docentes actualmente en actividad, de la enorme dificultad que hay para acceder a esos links para poder realizar las cargas y registrarse; la mayoría de los docentes tiene que estar desde las 3 de la mañana tratando de ver si pueden realizar ese trámite.

También nos preocupa la denuncia que hace la UEPC en su página de que no han sido convocados los vocales gremiales para fijar ciertas limitaciones en los cargos que van a ser tenidos en cuenta en esta convocatoria.

Sabiendo que ha entrado a esta Legislatura un proyecto de reforma del Estatuto del Docente, que debiera ser debatido como corresponde, escuchando a todos los actores, nos preocupa sobremanera este avance sobre el Estatuto del

Docente que, de facto, realiza el Ministerio de Educación, como les decía al principio, generando una discriminación que no está justificada absolutamente en ningún criterio de peso ni en ningún beneficio para los docentes, y muchísimo menos para quienes son los destinatarios del trabajo docente, que son los alumnos cordobeses.

Por eso, lo traemos acá para que sea discutido y podamos saber de qué se trata.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Marcone.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

-17-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio para plantear una cuestión de privilegio, recordándole que cuenta con 5 minutos para fundar el carácter preferente, y que se requiere una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes.

Legislador: lo escuchamos.

Sr. García Elorrio.- Gracias, presidente.

Cuando empezó la sesión de hoy averigüé, primero, qué había pasado con la presentación que había hecho la legisladora De Ferrari, y se me dijo que no iba a ir a ninguna comisión, que iba a tener un trámite administrativo; o sea, que no iba a tener un tratamiento legislativo.

Cuando intenté explicar, tranquilamente, por qué yo consideraba que debía tener un trámite legislativo, pidió la palabra -o se la dieron, no sé- el doctor González, que no tenía por qué hablar en ese momento, porque era una cuestión mía con el presidente de la Cámara, y dijo: "García Elorrio plantea esto porque es un fanático, acá no hay nada que hacer". Comprenderá que a mí no me preocupa lo que piense el doctor González sobre mí, lo que sí me preocupa es que ese sea el argumento de autoridad que él tiene para cerrar cualquier posibilidad de que yo participe. O sea, tendrá que encontrar otros motivos, otras razones.

Aparte, el doctor González, abusando de su cargo -porque, es verdad, nos hizo una enseñanza a todos, como buen médico que es-, nos dijo que jurídicamente esto estaba terminado. Yo hubiera sido un poco más humilde y hubiera dicho: "yo creo", "a mí me dijeron". La realidad es que ustedes me censuraron, y yo iba a hacer un aporte importante, porque creo que debo hacer ese aporte importante, presidente, porque esto no está terminado, al contrario.

Lo que le ha dicho a la señora De Ferrari un tribunal es: "usted vaya, no tiene que venir acá por un amparo, usted tiene que ir al lugar donde la han

sancionado y ahí plantear el recurso de inconstitucionalidad”, le han marcado un... Por eso ha venido esa señora acá y ha planteado eso.

Y si no -fíjese hasta dónde se puede victimizar a una persona-. si nosotros no cumplimos con ese solo paso –un pasito chiquito–, como Cuerpo -no administrativamente, porque esto lo entendió el Cuerpo, el Cuerpo aplicó una sanción, es una cuestión de privilegio–, si nos desentrañamos de nuestra condición de órgano que la sancionó para darle una respuesta administrativa, la dejamos sin posibilidad de que haga su recurso. ¿Por qué? Porque para llegar al Superior Tribunal de Justicia, como le indica la Cámara Contenciosa, ella tiene que plantear, primero, ante el órgano que la sancionó, el recurso de inconstitucionalidad, que es lo que ayer ha venido a hacer aquí.

Entonces, no la revictimicemos más; no costaba nada –eso era lo que quería pedir– que sesionara esta Cámara y decidiéramos si le dábamos o no el recurso ante el Superior Tribunal, como ella lo ha pedido. Si se lo damos, tendrá que asumir la banca de nuevo, porque es efecto suspensivo, y si no se lo damos no podrá asumir hasta que el Superior Tribunal atienda la cuestión.

¿Qué quiero decir con esto? La sacamos de esta Cámara en un procedimiento sumamente exprés; se quiso defender y le dijimos que no, o se le dijo que no. ¡Fue una cosa increíble! Y, ahora, que está siguiendo los pasos legales, lo único que tenemos que hacer nosotros –porque así lo manda la ley– es decir: “señora, este recurso que usted nos plantea lo concedemos, o no lo concedemos”.

Entonces, creo, estimado doctor González, que ante un legislador que simplemente quería poner esto en condiciones de información de la gente, para cumplir la ley -por lo menos en esta parte cumplirla, hacerlo bien-, no se justificaba que usted me mandara a callar con el argumento de autoridad de que yo soy un fanático.

Está bien, usted no me mandó a callar, era como diciendo: “como García Elorrio es un fanático...”. Y le digo la verdad, no me molesta que usted diga que yo soy un fanático, quédese tranquilo; lo que me molesta es que utilizara ese argumento para otra cosa mucho más importante, que era frenar una intención legítima que yo tenía de ayudar a esta Cámara, que ha actuado como tribunal sancionatorio, para hacer un aporte. Ahora, está esa señora ahí esperando tan sólo que nos dignemos a decirle: “señora, no le damos la apelación, el recurso”, o “sí se lo damos”, eso es lo que le ha dicho la jueza contenciosa.

¿Por qué lo plantee esta tarde, doctor? –y con esto termino-, porque usted es testigo, doctor González, de que lo plantee esta mañana en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria; con un respeto casi digno -y sorpresivo- pedí que me dieran dos minutos para explicar cómo entendía yo cuál era la situación legal, si consideraban que yo podía hacer algún aporte, y el Vicegobernador no me dio esa oportunidad. Lo quise hacer cuando empezó el debate y usted me cortó, en cierta forma, y dijo: “García Elorrio es un fanático, acá no hay nada más que hablar”.

Por estas razones, dejo planteada esta cuestión, estableciendo que no es el calificativo lo que me preocupa, lo que me preocupa es la utilización de un calificativo para que se frustre un aporte de buena fe que se quería hacer en el debate.

Nada más.
Gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración el tratamiento de la cuestión de privilegio planteada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazado.

Se gira a comisión.

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Piasco a arriar la Bandera Nacional del mástil de recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 19 y 01.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos